

El insurgente

ÓRGANO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO Y DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

AÑO 25/ No. 206 MARZO 2021



ÍNDICE:

Página 3

EDITORIAL

Página 4

FICCIÓN POLÍTICA

Página 8

REFORMAS Y OPRESIÓN

Página 11

ECONOMÍA, DEPENDENCIA Y MEDIDAS BURGUESAS

Página 14

TERRORISMO DE ESTADO Y PRÁCTICAS INHUMANAS

Página 17

MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN EN ASCENSO

Página 21

EL EJÉRCITO BURGUÉS MEXICANO Y SU PAPEL REPRESIVO

Página 25

LA LUCHA CONTRA EL SARS-COV-2 Y LA DEMOCRACIA BURGUESA

Página 29

ESTADO DE DERECHO BURGUÉS PARA GARANTIZAR IMPUNIDAD

Página 31

REFORMAS A LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, MEDIDA
PROFASCISTA

Página 33

LOS VENEROS DE LA CORRUPCIÓN

Página 35

LA ACTUAL DEMOCRACIA BURGUESA

Página 40

REVOLUCIÓN A DEBATE / El Estado burgués y su papel

Página 43

PENSAMIENTO DEL MILITANTE COMUNISTA/ El trabajo bajo una concepción proletaria

Página 45

CARTAS DE LA MILITANCIA / La preparación del militante

Página 47

BIDEN Y LAS CONTRADICCIONES IMPERIALISTAS EN EL SIGLO XXI

Página 52

VIENTOS LIBERTARIOS / Templanza proletaria



EDITORIAL

El conjunto de reformas impulsadas tanto por el poder Ejecutivo como el Legislativo configuran un proceso de fortalecimiento del estado de derecho oligárquico, al mismo tiempo, éste permite afianzar el Estado policiaco militar en garantía de los intereses burgueses.

El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) queda en evidencia como parte del engranaje del Estado mexicano para ejercer la opresión; parte del mecanismo jurídico para imponer la justicia burguesa, para el pueblo no hay justicia.

El caso de desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la SCJN elude responsabilidad, maniobra para garantizar impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y se subordina a intereses de grupo de poder económico.

Queda claro que la política de la actual administración en torno a los crímenes de lesa humanidad es omisa, cómplice con las dos administraciones que fincaron su política interior en el terrorismo de Estado en tanto que no se garantiza juicio y castigo a los responsables de la violencia institucional contra el pueblo.

Desde la actual política de gobierno, a las víctimas del terrorismo de Estado se les pretende mantener en el olvido y en el limbo jurídico que no garantiza justicia; sin embargo, a los criminales de Estado se les garantiza impunidad y los políticos de oficio se rasgan hipócritamente las vestiduras en vísperas del proceso electoral.

Expresión de la misma política es la continuidad de la violencia de clase que emana del Estado contra el conjunto de los oprimidos, ésta se expresa en crímenes de lesa humanidad que son a la vez de Estado, éstos en lugar de ser historia son presente en toda la geografía del país.

La militarización de la sociedad expresa mayor poder a la cúpula policiaco militar y un intenso proceso de subordinación del poder civil a los militares, síntoma de los vientos de autoritarismo que se pretende revestir con legalidad.

La violencia de clase que cobra miles de víctimas del pueblo se eleva a ley con el conjunto de reformas que hacen legal la actuación del aparato represivo; en gobiernos panistas y priistas dicha violencia era evidente, inocultable, en la presente administración es velada y enmascarada con lenguaje mediático para ocultar el terrorismo psicológico en nombre de la pandemia, en ese contexto las prácticas del terrorismo de Estado poco a poco emergen por su magnitud.

La realidad configura una verdad incuestionable, pueblo miserable y reprimido, en contrapartida, un gobierno que finca su política en la demagogia y la justificación de la violencia de clase que lacera al pueblo.

pdpr-epr



FICCIÓN POLÍTICA

Hechos que no corresponden a la opinión presidencial

La actual administración enfrenta los mismos problemas que las anteriores en materia de la política asistencialista, ésta tiene fines contrainsurgentes; a la vez, la corrupción es un fenómeno imbatible en tanto es intrínseco al régimen económico y político.

Resulta insostenible la afirmación que por el sólo hecho del arribo de la actual administración el combate a dicho flagelo sea real y efectivo, lejos de las buenas intenciones, es un fenómeno que crece aquí y acullá, brota en todas las instituciones y es practicada por los hombres del régimen.

La falta de claridad de más de 3 mil millones de pesos, la no funcionalidad del Banco del Bienestar y las Tarjetas del Bienestar hablan de inconsistencias inocultables que conduce a la configuración de prácticas corruptas por funcionarios de todos los niveles y filiación política.

Es obvio que en el manejo de los recursos de dichos programas hay una intencionalidad política, están orientados a conformar una base política para Morena por la vía del corporativismo; al mismo tiempo que la esencia de la política asistencialista no rompe con el objetivo contrainsurgente que promovieron los gobiernos priistas-panistas.

El asistencialismo social, como lo llaman los hombres del régimen, no está diseñado para combatir a fondo la pobreza ni la miseria, por el contrario, su carácter contrainsurgente se revela en la medida que degradan al ser humano, lo envilece al convertirlo en sujeto pasivo que sólo espera la “ayuda” del gobierno, el “proyecto social” para seguir en una vida cuasi parasitaria.

El slogan publicitario durante la campaña electoral y ahora de la actual administración nos ilustra que, en efecto, primero perecen los pobres de hambre o miseria que los pudientes; que primero enferman y avanzan más rápido a la

muerte por efecto de la desnutrición y males crónicos degenerativos producto de precariedad material, porque sólo el oligarca tiene asegurada cama y atención en el hospital.

A diario desde el púlpito presidencial se da “cátedra” de cómo se gobierna el país, sin embargo, es a través de este mecanismo mediático que se impone no sólo agenda política, a través de él se da una visión del país que al confrontar con la verdad no corresponde, en consecuencia, se revela una ficción política.

La corrupción como parte de la política burguesa no es cosa del pasado, ésta es tal que corroe instituciones e impregna toda la política del gobierno, tal situación es lo que sucede en torno al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los 567 millones de pesos ejercidos de manera indebida ilustran que dicha práctica está muy arraigada en el funcionario público y en el político de oficio; en esa misma lógica está Jóvenes Construyendo el Futuro, resultó ser un fiasco. La conclusión que emerge es nítida, los programas asistencialistas de la actual administración están tocados por los mismos males de lo que fue Prospera, que engendró ríos de corrupción en lugar de superación de la pobreza y la desigualdad social.

Activismo político pro Morena

Mucho se ha hablado de los servidores de la nación como sujetos cuasi inmaculados, no obstante, ¿quiénes son, a qué obedece su actuar? En el hecho los servidores de la nación son activistas políticos y promotores activos de la denominada 4T; por su proceder son activistas electorales del partido que hoy tiene en su haber la administración federal, es decir, Morena; y, promotores de la figura presidencial, la cual es elevada a condición espiritual.

Una vez más, hay que ver los hechos para confirmar que muy lejos están las palabras de quien preside la actual administración federal, el



cual no tiene empacho en decir que “son mujeres, hombres con convicción, con principios, gente que está a favor de la transformación, que le tiene amor a su pueblo, a su prójimo. No son simples funcionarios públicos. Hay gente con convicciones, mística, entonces, siempre han estado ayudando”. Desde esa perspectiva, serían el sujeto revolucionario.

La verdad es otra, salvo contadas excepciones, la mayoría está por un salario, por la chamba; los principios por lo regular están ausentes; no hay rastro de solidaridad, vaya ni de filantropía, su chamba promueve la corporativización del pobre, son ellos los que deciden a quien le llega la “ayuda social” y quién no la necesita, ejemplos sobran para constatar dicho proceder en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

La ayuda gubernamental se define de manera burocrática, por inclinaciones y manejo político, al “buen criterio” del servidor de la nación que define dar todo el apoyo al sujeto en descomposición que al ciudadano que es productivo. Su proceder se explica porque del trabajador consciente hay crítica política, a diferencia de quien está en la descomposición o asume una actitud pusilánime, “cordura” y complacencia, es decir, una actitud pasiva que reproduce los mecanismos de la degradación humana.

Corporativización por ley de los pobres

Tras la política asistencialista y la promoción de “primero los pobres” la actual administración y el partido que lo prohijó, Morena, está un intenso proceso de corporativización de los pobres que lleva implícito contenido contrainsurgente.

Es claro que el Padrón Único de Beneficiarios expresa dicho proceso, se corporativizan masas urbanas y rurales que viven en la precariedad material. Queda de manifiesto que el objetivo es construir base política cautiva con fines electorales; la pobreza, la miseria y la desigualdad social son administradas bajo el contexto de los tiempos electorales.

Para la 4T en cada protesta e inconformidad popular ve moros con tranchetes, en su concepción

política ahí no hay pueblo, “sólo actores que no tienen ninguna representatividad”; en esa perspectiva, su política para “atender al pueblo” es reaccionaria, por disposición hecha ley en política, se niega el derecho a la organización, a la protesta. Para la 4T y la actual administración federal la inconformidad y la protesta popular son “reclamos muy subjetivos, muy genéricos”, para rematar, desde la oficialidad se abrogan el derecho a la representatividad absoluta del sujeto indígena.

La realidad y la verdad política es muy concreta, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la precariedad material de las masas, la incontenible marginación social, el incesante desempleo, la incertidumbre de la existencia por ser pobre no es “un reclamo subjetivo o genérico”, en conjunto expresan la violencia de clase que se ejerce contra el universo de los explotados y oprimidos.

Afirmamos que la actual política asistencialista tiene un carácter contrainsurgente y reaccionario en tanto que se pretende anular la inconformidad, la protesta popular, la exigencia de justicia por la vía de la orden presidencial, fenómenos que tienen una condición objetiva, negar su existencia y pretender anular cualquier expresión de la voluntad popular de combatir, eso sí es conservador, reaccionario y alienta en política una posición profascista.

Una vez más, la iniciativa privada en primer orden

En el discurso presidencial figura el culpar por todo a los “neoliberales”, una verdad a medias que se eleva a oración pontífice. Lejos de combatir el poder opresivo de la iniciativa privada, ésta se beneficia de la actual política de gobierno, cuando sus intereses son trastocados emerge crítica empresarial para meter cuña para que la actual administración recomponga la política.

La política económica impuesta por el imperialismo, el neoliberalismo, imprimió un sello característico en nuestro país, en la medida que dicha política fue asumida de manera activa por el gobierno mexicano en turno, desde el Estado se promovió la protección absoluta de los intereses de



los monopolios nacionales y extranjeros. El capital monopolista, en específico el transnacional, fue el beneficiario de la política neoliberal.

El problema no es reconocer dicha realidad, sino en no dar pasos concretos y radicales para transformar la realidad socioeconómica del país, el neoliberalismo fue hecho ley a través de las reformas estructurales promovidas por los políticos de oficio, empresarios, líderes charros, funcionarios públicos y gobiernos emanados del PRI, PAN, PRD y PVEM.

Tanto la reforma energética y educativa procuran la defensa del interés monopolista, la primera facilitó la incursión del monopolio transnacional, el esquema promovido por la reforma convertida en ley facilitó y procuró descaradamente el saqueo.

En ese contexto la “protesta” de la iniciativa privada, amenaza y mete cuña al posicionarse de frente a la iniciativa presidencial para modificar la actual ley que beneficia al monopolio, su decir que “ya no invertirá ni un peso” en energías renovables, sólo es un desplante mediático, nunca han sido ni serán afectados sus intereses.

Desde el actual esquema de ley que permite la “colaboración” de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica, las energías eólica y solar, constituyen un enorme negocio para los monopolios del ramo.

El saqueo es descarado a través del financiamiento público, los monopolios en la energía eólica son los principales beneficiarios, éstos son de carácter transnacional de origen español, danés, alemán, norteamericano, francés y chino. El saqueo se tasa en 412 mil millones de pesos a través de diferentes artilugios como el subsidio, “riesgos cambiarios y de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes”.

El fenómeno se nos presenta desde varias percepciones, desde la actual administración se presenta la iniciativa para modificar a la ley como un acto revolucionario; desde los monopolios de la comunicación y las agrupaciones burguesas como un grave atentado a la iniciativa privada; desde los

políticos de oficio progobierno como panacea económica; desde el mundo político “verde”, la defensa a ultranza de las energías limpias. Todos carecen de objetividad y encierran un interés político que no es el del pueblo trabajador, por ejemplo, los planteamientos de los partidos burgueses que dicen defender el medio ambiente se caracterizan por una hipocresía mercantil.

Los hechos una vez más revelan el carácter oligarca del gobierno de Peña Nieto y sus antecesores de Calderón y Fox, los contratos para la producción de energía por la multicitada iniciativa privada constituyen contratos leoninos, la reforma energética fue diseñada para hacer más efectivo el saqueo por el monopolio transnacional. Lo que no se puede ocultar, los “productores independientes” en realidad son consumados saqueadores.

Manejo mediático y político de la pandemia

Los políticos de oficio, sin excepción, así como los partidos burgueses hacen manejo mediático y político de la pandemia; el gobierno en turno hace lo propio, la tendencia y la lógica es la misma, se fetichizó al virus, se tomaron medidas profascistas con fines de control social, la campaña de “información” derivó en un mecanismo del terrorismo psicológico, en conjunto la política sanitaria para enfrentar la actual crisis de salud se revela como antisocial que afecta terriblemente al ser genérico, éste de ser un ser gregario se le obliga por ley a ser ermitaño e individualista.

Todos los partidos electorales lucran con la pandemia, emergen sin tapujo las prácticas mercantiles de la política burguesa; la demagogia es el signo del proceder del político de oficio, en ese contexto, destaca Morena en el manejo mediático, resulta falso lo que difunde, ni un solo peso ha destinado para la pandemia del presupuesto que le corresponde por ser “la primera fuerza política”.

Gobiernos “opositores”, empresarios denominados emprendedores, políticos de oficio de toda laya y las plumas mercenarias se caracterizan por promover el terror psicológico,



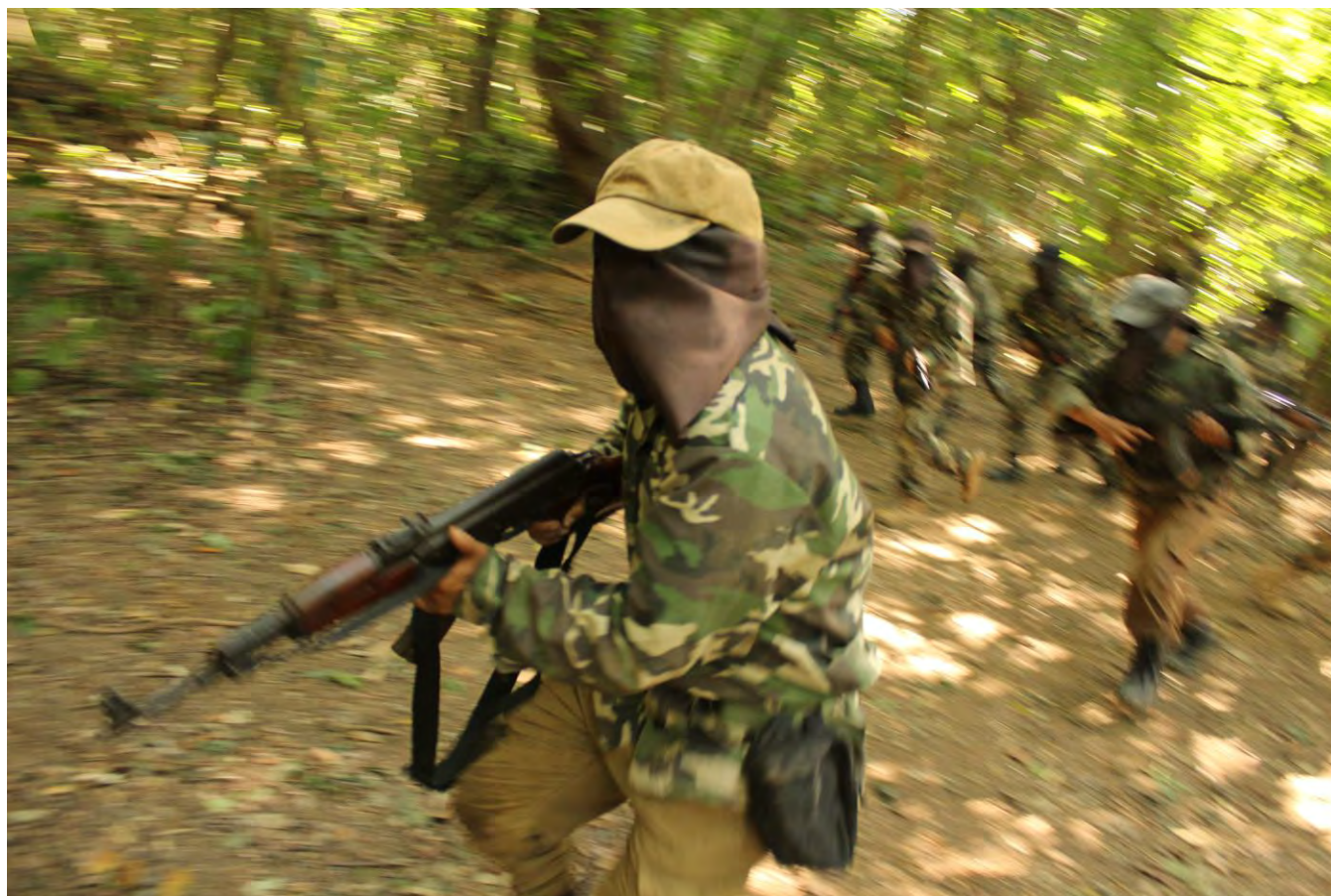
éste en la medida que penetra en la psique del que se queda en casa, constituye la base social para que sea aceptada cualquier medida profascista, asumida como un mal necesario para “no morir de Covid”.

En conjunto, la situación política del país expresa las contradicciones interburguesas que imperan y que se manifiestan en el marco del proceso electoral en ciernes; las inconsistencias entre el discurso oficial y la vida real de las masas trabajadoras, éstas viven en la precariedad material; y, la tendencia de mantener el ritmo en el fortalecimiento del Estado policíaco militar, el estado de derecho oligárquico y la imposición de

medidas profascistas desde el Legislativo, éste en cada medida de dicha naturaleza refleja qué tan alejado está de los intereses populares.

El cambio social en función de los intereses populares no está en el remozamiento del actual régimen de explotación y opresión; la transformación del país no se finca en el amasijo con la iniciativa privada, ésta siempre vela por el interés del capital. El cambio sólo es posible en la medida que se destruyan las bases económicas que le dan sustento al régimen económico y político, la revolución es el camino, la reforma burguesa sólo contiene el carácter revolucionario de las masas.

vdpr-epr



“El cambio sólo es posible en la medida que se destruyan las bases económicas que le dan sustento al régimen económico y político, la revolución es el camino...”



REFORMAS Y OPRESIÓN

En el curso del actual sexenio el andamiaje de la opresión se robustece con mecanismos más coercitivos y antipopulares. Al igual que las administraciones anteriores, particularmente, la de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en la actualidad desde el Legislativo en contubernio con el Ejecutivo se avalan reformas constitucionales, promulgan leyes y modifican códigos penales con naturaleza antipopular y reaccionaria.

La labor reformista de la junta administrativa procede en torno a fortalecer el Estado policiaco militar y el estado de derecho oligárquico. De manera genérica reformas, leyes promulgadas, modificaciones a códigos y medidas políticas económicas desembocan en dos intereses generales con carácter de clase bien definido: los económicos y políticos.

Los económicos son orientados en dos campos generales, por un lado, se otorgan garantías de reproducción al capital, por el otro, el Estado pretende extender sus fuentes de financiamiento, ambos aspectos, confluyen en la defensa y continuidad del actual régimen social.

Para tal efecto, los intereses en apariencia contradictorios entre capital y Estado se fusionan en el estado de derecho oligárquico con el que se legitima la explotación capitalista; y, los intereses políticos se emplazan entorno a vigorizar al Estado policiaco militar, alimentar la demagogia o simulación y en anular la voluntad popular de combatir.

Ambos tipos de intereses transfigurados en dichas figuras formales del Estado mexicano no se encuentran separados, confluyen de tal forma que juntos atentan contra los intereses populares. Se legaliza la militarización del país y legitima el proceder terrorista y criminal de los cuerpos represivos; se restringe el poder civil y se acrecienta el poder de los militares; se criminaliza la protesta popular; se abre la puerta a la

configuración de una casta de opresores autoritarios en el Legislativo; se anulan de facto derechos constitucionales y humanos; se endurecen las medidas tributarias; se coloca a las grandes masas en una situación más vulnerable a la corporativización; y se imponen más medidas profascistas de control social.

Robustecer los mecanismos de la opresión no es un aspecto singular del papel de la actual junta administrativa, es una constante que se reproduce administración tras administración, la diferencia estriba en los matices formales con los que cada junta administrativa procede para materializar lo que demandan sus intereses de clase.

El gobierno de la “cuarta transformación” ha sido astuto para imponer su política antipopular. Ejerce el absolutismo al mantener la mayoría de las curules en las dos cámaras del Legislativo; desde gobiernos estatales con descaro se imponen medidas y leyes que coartan el derecho a la protesta, al libre tránsito y manifestación; vela con demagogia y distracciones mediáticas el carácter de clase de las reformas constitucionales; ha impuesto medidas y modificaciones constitucionales en el contexto del terror psicológico promovido en tiempos de pandemia por el Covid-19; y, desde la tribuna permanente de Estado con las mañaneras impone dictadura de opinión, enjuicia y descalifica de manera unilateral toda crítica, al igual que, niega de manera absoluta acontecimientos de la realidad objetiva, en particular, los hechos de represión y corrupción de su gobierno.

Al ser abstracción de los matices, es evidente que la conexión entre la actual junta administrativa y sus antecesoras respecto al papel del Estado, estriba en su carácter de clase, el cual se refleja en gobernar con los militares como principal puntal del régimen; en dotar al Estado con más herramientas para la represión, endurecer y justificar la opresión desde el Legislativo; y, en



una policía fiscal que busca mayores recursos para el Estado.

Si tomamos al Estado mexicano en su conjunto, aquilatamos el carácter de clase de las reformas aprobadas en el presente gobierno y la de sus predecesores inmediatos, tenemos como resultado que el Estado tiene un carácter reaccionario y antipopular progresivo. En ese sentido, el gobierno de la “cuarta transformación” es de continuidad, un eslabón del Estado burgués mexicano y sus personificaciones, tristemente sus creaturas.

El progresivo carácter antipopular y reaccionario del Estado es un proceso que emana de las contradicciones del régimen social, en singular por la existencia de intereses de clase antagónicos e irreconciliables, no obstante, ello no exime de responsabilidad a las personificaciones que promueven, aprueban y ejecutan las leyes con las que se conduce el Estado, ya que, como sujetos políticos con sus actos toman partido en la lucha de clases.

La evidencia pone en manifiesto que el presente gobierno con sus paladines que han promovido y aprobado reformas devenidas en un instrumento de opresión de la clase burguesa más reaccionario, desde un inicio tomaron partido como enemigos del pueblo y defensores del oprobioso régimen.

Hagamos a un lado lo general y pasemos a lo concreto para puntualizar lo afirmado. Las principales reformas, modificaciones en códigos y leyes que ilustran con creces lo aseverado son las siguientes:

1. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.
2. Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.
3. Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

4. Decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
5. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
6. Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. (Publicada en el DOF: 11/05/2020).
7. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
8. Decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial.
9. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Los casos citados son un muestrario de cómo desde el Legislativo en amasiato con el Ejecutivo



se da continuidad a un proyecto de Estado que rebasa sexenios y lo dota de más mecanismos antipopulares y reaccionarios. Los efectos contra las grandes masas y la imposición de los intereses burgueses sobre la sociedad son evidentes.

Hechos concretos:

- a) La creación de un cuerpo de hombres especializados en la opresión denominado Guardia Nacional, una corporación disfrazada de civil con mando y formación militar, cuerpo represivo añorado por sexenios anteriores. Verbigracia correlativa, las transfiguradas Gendarmería y la Policía Federal.
- b) La justificación institucional de la militarización del país, al mismo tiempo mayor poder económico político a militares y marinos, el resultado, una junta administrativa que gobierna con la mano militar, una sociedad sometida por los cuerpos represivos y un poder civil dócil a la cúpula castrense. Este es un escenario configurado fundamentalmente en cuatro sexenios.
- c) El derecho a la protesta y la libre manifestación es criminalizado con códigos penales tanto en el ámbito federal como estatal. Casos específicos: el decreto por el que se reforma el artículo 533 y adiciona un artículo 533 bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación; y reforma al Código Penal estatal de Tabasco. Éstos son correlativos con modificaciones vigentes a códigos penales en el pasado reciente en diferentes estados del país, ejemplo, en la Ciudad de México (CDMX) y Chiapas.
- d) La continuidad de proyecto de Estado se expresa de manera nítida en la correlación natural o de clase del trabajo en materia Legislativa de la presente administración con sus antecesoras. Tales son, los casos en los nueve puntos se correlacionan y tienen estrechos vínculos con las reformas al artículo 139 y 170 del Código Penal federal

en el 2014, reformas al Código de Justicia Militar en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre otros.

- e) En supuesto fundamento de desalojos pacíficos en apego a los derechos humanos la represión contra las masas populares se anuncia como acto de justicia gubernamental. Verbigracia, la represión a manifestantes en la casetas de cobro número 181 Malpasito, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, ejecutada por tres niveles de gobierno y la coordinación de tres estados gobernados por MORENA en 2019; en agosto del mismo año donde cinco casetas de peaje en Baja California fueron reprimidos manifestantes por el gobierno del estado y el federal; en Sinaloa el 29 de noviembre del 2020, en operativo mixto encabezado por la GN se desalojaron a manifestantes de seis casetas de peaje; el mismo año en Nayarit y Estado de México; y, otros múltiples casos.

Por todo lo anterior, queda claro lo siguiente:

Primero. El pueblo tiene de frente a un enemigo peligroso que allana las puertas y emplaza mecanismos de opresión con la intención de anular con la reacción la lucha por la emancipación popular;

Segundo. Por su trabajo legislativo la actual junta administrativa es un gobierno ultra reformista que hace apología a la concepción liberal del Estado burgués y a un eclecticismo terrible, en esencia, por fuerza de ley social comparte criterios prácticos de sus supuestos contrarios nombrados por él como neoliberales y conservadores, en términos concretos, es un gobierno antitético de lo que propaga en su propaganda; y,

Tercero. Toda reforma, ley o modificación de las mismas en el contexto capitalista fortalecen al Estado burgués, retocan al régimen de opresión y perpetúan la explotación capitalista. por tanto, en un contexto histórico de explotación y opresión capitalista para un cambio radical de la sociedad se requiere necesariamente una revolución socialista.



ECONOMÍA, DEPENDENCIA Y MEDIDAS BURGUESAS

Economía mexicana y dependencia

La economía mexicana sigue enredada en las escenas de la crisis crónica del régimen capitalista. El episodio de crisis de producción; la caída en 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos comparativos a enero del 2020; la disminución de la tasa de interés referencial; y una tendencia al alza en el incremento de los precios, en este momento son las expresiones más marcadas de la recesión que aún enfrenta la economía del país.

El evento de crisis de producción industrial registrado en febrero del presente año es producto de la dependencia económica al imperialismo, en particular al estadounidense, tal relación nociva cobra una vez más factura al proceso de producción, es un costo manifiesto en paros técnicos, disminución de la producción, incremento en los precios de los hidrocarburos y apagones eléctricos a causa de delegar en 80 por ciento el suministro de gas natural al extranjero.

El caso en mención es una de las muchas consecuencias potencialmente posibles a la dependencia económica. La escasez de gas y el déficit en la producción de energía eléctrica son efecto de la dependencia, por tanto, son causales secundarias por donde transcurre la causa primaria, hoy fue el gas natural, mañana puede ser cualquier otro factor ligado a la dependencia económica, ejemplos: la gasolina y los granos.

La escasez de gas natural detonada por factores climatológicos en el norte del país y el sur de Estados Unidos (EU), aunado a ello, las medidas del gobierno texano han puesto en

relieve la magnitud de lo comprometida que se encuentra la economía mexicana al extranjero.

El país en su territorio alberga cuantiosos recursos naturales para la generación de energía, contrario a esa condición natural, en la actualidad la política del Estado mexicano en dicha materia es antitética, descansa en criterios erróneos apologeticos a las ventajas comparativas que promueven como panacea para el desarrollo económico tanto liberales como neoliberales.

Sexenio tras sexenio se ha apostado a la importación de gas natural, al desdeño a la producción del mismo y a un proceso de privatización del sector energético, ¿el resultado? La disminución de la producción nacional, el incremento de la importación de dicho hidrocarburo y mayor presencia de transnacionales en el ramo, en suma, dependencia en gas natural y en generar energía eléctrica.

Dicha dependencia es uno de los resultados de las políticas económicas imperialistas aplicadas para el desarrollo del país; constituye una expresión singular de los costos de la política neoliberal con la que se ha conducido a la nación por décadas. En su conjunto, una condición económica que pretende maquillar el presente con medidas vinculadas a la forma, pero no a la causa.

De igual manera, el déficit de gas natural y de electricidad registrado en el país a razón de la dependencia en dicha materia dicta la precaria política del Estado mexicano en materia de soberanía nacional, y, pone en claro la mediocre visión de los políticos de oficio sobre desarrollo industrial.



En tal concepción, es tradición en los políticos de oficio la apología a la dependencia y el entreguismo. Signo político económico plasmado en planes de desarrollo sexenio tras sexenio, parte nodal de la política económica burguesa con la que se ciñe a la nación al atraso técnico y a la servidumbre del capital monopolista.

Del total del gas natural que se consume en promedio el 80 por ciento se importa de EU, en particular de Texas; la reducción de producción de gas natural en un 30 por ciento del 2009 al 2020; y el incremento en un 5000 por ciento en el precio de dicho combustible en menos de una semana.

El Estado mexicano en voz del representante del Ejecutivo federal esgrime ante el fenómeno que la crisis de gas y energía se resolvió en cinco días, ¡falso! La causa del fenómeno no fue modificada, la dependencia económica al extranjero pervive como uno de los rasgos de la economía mexicana.

El comportamiento al alza de precios de las mercancías registrado en el 2020 continúa en el presente año. El evento de crisis de producción que se registró en febrero aceleró el comportamiento al alza patentado en enero, en suma, en el país cala el comportamiento al alza en los precios en cadena: materias primas, medios de producción y medios de consumo incrementan su precio. Circunstancia que afecta en mayor medida a millones de mexicanos que representan la fuerza de trabajo por ser ella quien en términos relativos a su contrario pierde poder adquisitivo, ya que, en dicha circunstancia de alza general de precios, el precio de la fuerza de trabajo permanece constante.

En la relación capital trabajo a raíz del episodio de crisis en mención, un universo importante de asalariados se ha visto afectado no sólo en su salario real, también en el nominal y en las condiciones laborales. Monopolios y sus

filiales maquiladoras en contubernio con sindicatos charros, imponen reducción salarial de 50 o 25 por ciento a obreros cinchados por el paro técnico, y, exigen mayor rendimiento productivo en un menor período de tiempo. Un fenómeno que se reproduce con mayor frecuencia en las maquiladoras, quienes, al amparo del poder monopolista se invalida en los hechos la ley laboral, en paralelo, el gobierno mexicano deja hacer y pasar dicha arbitrariedad e injusticia laboral.

Ligado a la magnitud de la recesión económica en general y en particular al evento de crisis de producción, se encuentra la medida tomada por el Banco de México (Banxico) quien en unanimidad decidió reducir 25 puntos base la tasa de interés referencial, la cual fue establecida en 4.0 por ciento.

En el actual contexto, lo enunciado por Banxico constituye una medida anticrisis que intenta paliar la aguda recesión económica. Desde la lógica capitalista, los apologistas de las teorías económicas burguesas del siglo XX intentan estimular la demanda, estimular la circulación del dinero y se esfuerzan por apoyar con creces a las personificaciones del capital monopolista; en específico, la medida persigue estimular la inversión capitalista en paralelo al consumo.

Es el capital financiero quien en el escenario específico de la recesión económica por la que atraviesa el país se ve beneficiado con dicha medida; es el capital monopolista quien saca mayor tajada al ensanchar su posibilidad de incrementar su dominio en las ramas de la producción al absorber a los capitalistas en quiebra y ocupar el espacio en el mercado dejado por más de un millón de pequeños establecimientos mercantiles arruinados por la crisis; en contrapartida, son las grandes masas las sacrificadas, para ellas, mayor deuda, efectos inflacionarios que deterioran su poder adquisitivo



e ilusiones banales de una supuesta recuperación económica que las ha de beneficiar.

Carácter de las medidas en su conjunto

Es claro que la reciente medida de Banxico en la política monetaria; los llamados del Ejecutivo de ahorrar energía en un contexto de escasez de gas natural y apagones eléctricos programados; y, la controversia en materia energética entre grupos de poder burgués en las cámaras del poder Legislativo, tienen carácter de clase en donde lo prioritario es el capital.

La medida en la política monetaria en respuesta a la magnitud de la recesión económica causa efecto en el conjunto de relaciones económicas. En esencia pondera la reproducción del capital, para nada toma en cuenta las condiciones materiales de las grandes masas; en ese tenor se encuentra el llamado del Ejecutivo federal al pueblo para que ahorre energía al renunciar parte de su consumo, lo mismo sucede con los apagones eléctricos programados, uno y

otro con el propósito de priorizar a la industria capitalista.

En cuanto a dando un rodeo producto de las contradicciones entre estructura y superestructura. Por un lado, el capital monopolista pugna por tener la patente del negocio en sus manos, por el otro, a raíz de una crisis presupuestal el Estado burgués mexicano manotea por recuperar la rectoría del negocio para ampliar sus ingresos, ambas expresiones del poder burgués son ajenas al pueblo, una representa la explotación en tanto la otra la opresión.

En conclusión: el régimen social vive contradicciones en su ulterior que llevan intrínsecas medidas económicas derivadas de una política económica ceñida al capital monopolista y al Estado burgués, expresiones formales del poder burgués que en conjunto en un escenario de recesión económica sacrifican una vez más a las grandes masas populares.

pdpr-epr

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL*	
2009	7031
2015	6401
2018	4847
2019	4894
2020	4852
*millones de pies cúbicos diarios de acuerdo a Pemex.	

Elaboración PDPR-EPR, según fuentes periodísticas.



“...la Reforma Energética aprobada en el Legislativo responde al interés de Estado,..., a intereses capitalistas”



TERRORISMO DE ESTADO Y PRÁCTICAS INHUMANAS

Las fosas clandestinas es el lúgubre testimonio del terrorismo de Estado como política de gobierno que se ejerció en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, gobiernos panistas y uno priista que ejercieron el terror de clase contra los desposeídos, éstos fueron las víctimas que engrosaron la estadística tétrica con la cual trataron primero de minimizar el fenómeno y en lo consecutivo, desviar la responsabilidad de su ejecución en un enemigo imaginario, la delincuencia organizada.

Las fosas clandestinas que empezaron a pulular por todo el país son la prueba fehaciente del terrorismo de Estado, mudo testigo que alberga restos mortales y confirma que la víctima sufrió múltiples violaciones de derechos humanos, esto sucede desde la detención arbitraria, los tratos crueles y degradantes, la desaparición forzada y termina con la ejecución extrajudicial.

La fosa clandestina ilustra la sevicia de la violencia de clase, independientemente de la forma que ésta adquiera, es violencia organizada desde el Estado para hacer más efectiva tanto la opresión política y la explotación económica capitalista.

Cierto, la mayoría de las fosas clandestinas hasta hoy enlistadas en la estadística son responsabilidad de los gobiernos que anteceden al actual, sin embargo, existen hallazgos que confirman la existencia de ellas en lo que va de la actual administración, Guanajuato es el claro ejemplo.

El hecho revela dos aspectos del fenómeno de la violencia de clase que se ejerce contra los oprimidos: a) la mayoría de las fosas tienen origen en gobiernos panistas y priistas, es la confirmación del terrorismo de Estado como política de gobierno; b) las fosas de reciente confección ilustran que los crímenes de lesa

humanidad persisten, ahora en la modalidad como prácticas del terror de Estado. Esa es la diferencia de matiz que nos da un resultado concreto tanto en cantidad como en calidad del fenómeno de la violencia que emana desde las instituciones y hombres que le dan materialidad al Estado mexicano.

La estadística oficial es muy ilustrativa, aunque trata de diluir la esencia del fenómeno, señala que Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas concentran el 79.5% de víctimas halladas en fosas clandestinas. El dato también es revelador, en dichos estados testimonian la magnitud del terrorismo de Estado en los gobiernos señalados, no obstante, hoy Michoacán y Guanajuato registran innumerables prácticas del terrorismo de Estado que se materializan en la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial presentada como homicidios dolosos y el descubrimiento de fosas clandestinas de hechura reciente.

El fenómeno de la violencia contra el pueblo lejos de desaparecer aún persiste, por momentos disminuye y en otros tiene importantes repuntes estadísticos, como siempre, desde los representantes del Estado se difunde una posición que minimiza el fenómeno, como antaño, una vez más el discurso oficial choca con la realidad, veamos:

- a) La política de gobierno en el pasado reciente consistió en adjudicar la responsabilidad de la violencia contra el pueblo al mítico y nebuloso enemigo de la delincuencia organizada; hoy, la Secretaría de Gobernación sostiene dicha falacia al señalar que los cuerpos de las víctimas son *asesinatos ligados al crimen organizado*.

Si se indaga, tan sólo un poco fuera de los canales oficiales, se verifica por el vivo



testimonio tanto de víctimas directas como indirectas que a la cabeza de connotados grupos criminales siempre está una trama que involucra a militares, marinos, policías federales, estatales o municipales, funcionarios públicos de diferentes niveles, son las creaturas del sistema que hacen posible el funcionamiento del aparato coercitivo.

- b) Desde dicha institución se vanagloria que los familiares de las víctimas, agrupadas aproximadamente en 120 colectivos, “han hecho posible la localización de fosas clandestinas”; expresión política que trata de diluir la responsabilidad del Estado, éste es responsable de la violencia contra el pueblo, independientemente que como administración no haya sido responsable concreto en su ejecución, el resultado es el mismo, *se revictimiza a las víctimas, se les niega justicia y se elude la responsabilidad del Estado mexicano*. No son las víctimas las que deben buscar fosas clandestinas, ésta debería ser una tarea y responsabilidad del Estado.
- c) Desde la perspectiva oficial se sostiene que las desapariciones forzadas en el país han disminuido por año al “pasar de 8 mil 964 denuncias a 6 mil 957”, una apariencia que se presta al manejo político.

La realidad nacional es otra, la apariencia fincada en la estadística queda superada con los hechos concretos que testimonian familiares de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones políticas de masas y medios de comunicación, la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, crimen de Estado y una práctica del terrorismo de Estado que persiste en el país, Veracruz es el botón de muestra, están documentadas ocho desapariciones forzadas

en lo que va del mes de enero del presente año.

La denuncia ante dependencias oficiales nos indica: a) es limitada en cuanto no expresa con objetividad la magnitud del fenómeno, por temor no se denuncian todas las desapariciones forzadas; b) por el mismo factor, no todas las ejecuciones extrajudiciales son denunciadas como tal por los familiares, y las que se hacen son objeto de presión de todo tipo para cambiar su naturaleza.

- d) El caso Iguala más allá de las declaraciones desde la Secretaría de Gobernación, el múltiple crimen de Estado revela la magnitud de la violencia de clase contra el pueblo en el gobierno de Enrique Peña Nieto; en la medida que pasa el tiempo y no se llega a la real verdad histórica, ésta se escatima y manipula por una sencilla razón, no se quiere llegar a fondo porque se tendría que juzgar a toda la cadena que hizo posible tan deletznable crimen de lesa humanidad, pasa por juzgar al mando policíaco militar, cuyos individuos gozan de impunidad y algunos de ellos son “destacados” funcionarios del aparato represivo en la presente administración.

La verdad histórica que se refuerza según pasa el tiempo se quiere ocultar: el Ejército mexicano y las diferentes corporaciones policíacas federales y estatales fueron los responsables materiales del terrorismo de Estado expresado en el caso Iguala, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos-desaparecidos en una acción de contrainsurgencia organizada, ejecutada y dirigida por el Ejército mexicano a través del Mando Único que dirigía a todo el aparato represivo.

- e) Desde la Secretaría de Gobernación se afirma sin rubor que “garantizar el respeto a los



derechos humanos es prioridad del gobierno de México”, sin duda que desde lo mediático es una bella frase y una buena intención, pero sólo se queda hasta ahí, la realidad es tajante, la violación de los derechos humanos en México es una realidad, bajo el marco de la actual pandemia éstos se incrementan bajo la justificante gubernamental de “proteger a la población”, bajo ese hipócrita argumento se hace apología a las medidas fascistas a lo largo y ancho del país, el gobierno de Tabasco sería el ejemplo ilustrativo de las medidas antipandemia como expresión de un gobierno autoritario que no recibe ninguna amonestación por el gobierno federal.

- f) En la ruta de la demagogia y el autoritarismo está el acuerdo entre gobierno y organizaciones que se abrogan la representación de las comunidades Triquis en Oaxaca para que la Guardia Nacional incursione a dicha región indígena.

En realidad, se trata de un pacto entre gobierno y la expresión del paramilitarismo en Oaxaca que se traduce en mayor militarización e incremento de la violencia que emana del aparato represivo, en este caso con el binomio de policía estatal y Guardia Nacional.

La violencia de clase que se ejerce contra los oprimidos no se resuelve con buenas intenciones, ni con bellas frases mediáticas; las prácticas del terrorismo de Estado persisten y muestran la actual expresión de la violencia que emana desde el Estado a través de organismos formales o informales que componen el aparato policiaco militar.

La violencia que azota al pueblo se puede eliminar en la medida que se desmonte todo el aparato policiaco militar responsable de materializar el terrorismo de Estado y las prácticas fascistas que le dan materialidad.

pdpr-epr



MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN EN ASCENSO

En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador la militarización del país va en ascenso, no sólo en lo concerniente a geografía y control de vías de comunicación, también en ámbitos de la vida económica, social y política del país, a tal grado que las fuerzas castrenses en menos de tres años han impuesto lo que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron hacer: legitimar y legalizar sus operaciones militares, medidas de control social y ampliar su área de influencia en diversas esferas de la vida socioeconómica del país.

De igual forma la paramilitarización de la geografía nacional es galopante, encubierta con el velo de las siglas de tal o cual cártel del narcotráfico, se continúa el desangrado del país, se justifican desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados en zonas y regiones del país ricas en recursos naturales, sobre todo en minerales y metales preciosos, que por su valor representan un botín en tiempos de crisis capitalista.

Dos sexenios de ablandamiento del terreno

Fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa donde se intensificó el proceso de militarización del país, se le otorgaron amplias facultades al ejército para realizar tareas policíacas y de control social. No es que antes no existiera militarización del país, la había y con negros antecedentes en la comisión de crímenes de Estado y de lesa humanidad, no obstante, en dicho sexenio se puso en marcha un intenso proceso de militarización de dimensiones no vistas hasta ese momento.

Con el falaz argumento de “combatir al narcotráfico” los operativos militares y en conjunto con la policía se generalizaron, al igual que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de Estado, de tal manera que, gradualmente se volvió común el despliegue de fuerzas castrenses por calles, carreteras, pueblos, ciudades... así como los atropellos en retenes inconstitucionales, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.

Al tiempo que se decía combatir al “narcotráfico” y el “crimen organizado”, éstos se multiplicaban por toda la geografía mexicana, pronto quedó evidenciado que dicho fenómeno era generado desde y por el Estado, es decir, se trataba de una política de gobierno con fines económicos, políticos y sociales.

Durante todo el sexenio los militares ganaron presencia y terreno, se impusieron a pesar de los múltiples crímenes de Estado que se cometían con la aquiescencia del Ejecutivo en tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se esgrimió la teoría de la “seguridad interior”, es decir, se justificó la militarización con el argumento de estar en riesgo la seguridad interna de México.

Con el cambio de junta administrativa y el arribo de Enrique Peña Nieto en el Ejecutivo la lógica de militarización del país continuó, se argumentó que la presencia del ejército en las calles y desplegados en posición ofensiva era por motivos de seguridad, de nueva cuenta, se esgrimió el argumento de la “seguridad interior”.

Ante el repudio del pueblo por la militarización y el uso de las fuerzas castrenses en tareas de



seguridad que corresponden a los cuerpos policíacos, el ejército se esforzó por adquirir legitimidad y legalidad sobre su proceder anticonstitucional, para tal efecto, solicitaron que se les confirieran todas las facultades para continuar en el “combate al crimen organizado”. De manera que, tanto con Calderón como con Peña Nieto, diversas iniciativas de ley se discutieron en el Legislativo para lograr dicha petición, no obstante, no prosperaron.

Lo que se convirtió en un triunfo para las fuerzas castrenses fue su indiscutible presencia que se fortaleció con los “grupos delincuenciales” que se convirtieron en el azote del país, casualmente en la medida que el ejército adquiría más facultades y tareas en materia de seguridad, los “grupos criminales” también crecieron y se convirtieron en “monstruos” de mil cabezas.

La complacencia de la actual junta administrativa

Sexenios van, sexenios vienen, en tanto que la militarización y paramilitarización del país continúa su desenfrenado ascenso, primero con el PRI en las décadas de la llamada “guerra sucia”, después con el PAN con el “combate a la delincuencia organizada”, posteriormente otra vez con el PRI con los mismos argumentos, y ahora bajo renovados bríos con Morena no se detiene el proceso.

En menos de tres años el gobierno de López Obrador intensificó la militarización y sus consabidas consecuencias, como violaciones a los derechos humanos, abusos y arbitrariedades de todo tipo, como es la costumbre, el Ejecutivo se convirtió en el vocero del ejército para justificar su presencia en las calles, carreteras, comunidades y pueblos de México.

Las cifras millonarias destinadas al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son reveladoras, 112 mil 557 millones de pesos, 18 mil 528 millones más que el 2020, de acuerdo a lo

presupuestado para 2021, este dato da cuenta de cómo la militarización gana terreno año con año. Ni en los mejores tiempos del calderonato obtuvieron tal incremento presupuestal, tampoco en el sexenio de Peña Nieto.

Destaca el gobierno de López Obrador por su alta complacencia al ejército que se ha manchado de sangre con el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad. Dos ejemplos nos dan muestras de la realidad imperante, en el 2021 la Sedena operará con 31 millones de pesos más que el último año del gobierno de Peña Nieto y con tres veces más recursos que en el 2010 en la época de apogeo calderonista.

Es en este sexenio donde el ejército coronó varias victorias que le habían sido escamoteadas en anteriores administraciones, una de ellas, ser dotados de “certidumbre jurídica” por decreto presidencial para operar con toda impunidad, otra es, ampliar su esfera de influencia y control social, económico y político.

Con López Obrador, esto se convirtió en realidad, hoy el ejército no sólo tiene el control territorial del país a través de sus vías de comunicación, también controla aeropuertos, cuarteles de la Guardia Nacional, sucursales bancarias, programas sociales, hospitales destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el programa de vacunación de la pandemia, supervisa la distribución de libros y materiales educativos, se encarga de la custodia y distribución de fertilizantes en algunas regiones del país (Guerrero), del traslado de hidrocarburos, entre otras labores sociales, económicas y políticas que anteriormente nada tenía que ver el ejército en su operación.

La militarización de la vida socioeconómica del país ha sido vertiginosa en la actual administración que considera al ejército como “pilar de Estado” para lograr la supuesta cuarta transformación, en



atención a tal consideración, las fuerzas armadas construyen los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México, el de Tulum, Quintana Roo, y administra el puerto aéreo en Chetumal y el de Palenque Chiapas, también ha remodelado hospitales y construido canales de riego en el norte del país.

El arresto en Estados Unidos del General Cienfuegos, exsecretario de la SEDENA, y su posterior libertad negociada por el gobierno de López Obrador, es otro ejemplo de cómo el generalato se impone sobre el Ejecutivo, a pesar de que éste inicialmente había expresado su beneplácito, tuvo que recular y rendir honores a los altos mandos del ejército.

La realidad hace pedazos a los discursos demagógicos de los políticos de oficio que se desviven por justificar lo injustificable, en todo el país se ha agudizado el clima de violencia que emana de los cuarteles oficiales y campamentos clandestinos donde se reproducen las enseñanzas de la Escuela de las Américas.

En el contexto del 108 aniversario del Día del Ejército Mexicano -19 de febrero-, el jefe del Ejecutivo volvió a dar muestras de sumisión hacia la cúpula castrense, reiteró su agradecimiento a las fuerzas armadas y expresó su “deseo” de que se conviertan en “un cuerpo de paz nacional”, una vez más volvió a hacer una defensa a ultranza del ejército, halagos como, “*no es un ejército elitista, no es un ejército oligárquico, de oficiales millonarios que formen parte de los grupos de intereses creados en nuestro país*”, y “*todos los generales de división vienen de familias de campo... hijos de campesinos, obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, hijos de militares, del pueblo*” dan cuenta del empoderamiento del ejército en la actual administración.

La escalada de militarización continúa

La actual junta administrativa lejos está de contener el avance de la militarización de la vida económica, política y social del país, en tanto que no tiene el carácter, ni la voluntad para dar un giro auténticamente transformador al país, donde se contenga el desafiante poderío que los militares han acumulado, por el contrario, se ha fortalecido el andamiaje económico, jurídico y político para que las fuerzas castrenses fortifiquen su poderío, impongan su voluntad y se continúe por la ruta del terrorismo de Estado trazada desde los centros castrenses del imperialismo estadounidense.

Militarización y paramilitarización son un binomio inseparable, es la esencia de la escuela contrainsurgente imperialista, que se desarrolla y perfecciona acorde a las necesidades del imperialismo y del capital. Si bien Centroamérica y Sudamérica fueron escenario de la puesta en marcha de esta estrategia de sometimiento y control social, económico, político y militar, México no ha escapado a esta política de dominación imperialista.

A la par de la militarización del país, el paramilitarismo se ha incrementado a imagen y semejanza de sus creadores, han sumergido al país en una espiral de violencia sin precedentes en la historia, ¿coincidencia casual? No, es parte de la estrategia imperialista que impone a las juntas administrativas en turno, independientemente de qué partido político provenga el Ejecutivo.

Llámense como se llamen, todos los grupos paramilitares que operan en nombre de cárteles de drogas, tienen origen directa o indirectamente en las fuerzas castrenses, ya sea que hayan sido adiestrados por “excapitanes”, o que los “líderes” tengan vínculos familiares con generales, o simplemente que altos mandos del ejército les permitan operar a cambio de favores y cuantiosas sumas de dinero, el hecho concreto es que, le son útiles al Estado para justificar la militarización del



país y operar ampliamente una política de terrorismo de Estado.

Los cárteles del narcotráfico en tanto una variante del paramilitarismo tienen patente de Estado y le son útiles, pues en un contexto de violencia propiciada por dichos grupos delincuenciales, a las juntas administrativas represivas les es relativamente fácil justificar crímenes de Estado e imponer un Estado policiaco-militar.

La militarización de la vida socioeconómica del país es inherente al capitalismo, va de la mano con la imposición de las políticas imperialistas que se desarrollan a modo de los intereses oligárquicos, y en función de las necesidades del capital, por lo que no se detendrá hasta en tanto el pueblo no ejerza verdaderamente el poder popular y se transforme radicalmente al capitalismo en cuanto modo de producción y régimen político.

Conclusión

Es un absurdo sostener que el actual Ejército mexicano sirva a los intereses populares por el solo hecho de estar nutrido por hijos de campesinos y proletarios, en esencia lo que importa es su carácter de clase y su función como instrumento de opresión.

Un ejército burgués nunca estará integrado por hijos de oligarcas, de políticos de oficio o por ellos mismos, siempre será nutrido por los hijos de las capas más empobrecidas de la población, obligados por hambre se enrolan y en las filas castrenses son deshumanizados, ideológicamente alienados al régimen, son hijos del pueblo desclasados al servicio de los intereses de la burguesía.

vdp-pr-epr



\$ GOBIERNO BURGUÉS

SEDENA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

EL VERDADERO ROSTRO DEL EJÉRCITO BURGUÉS



EL EJÉRCITO BURGUÉS MEXICANO Y SU PAPEL REPRESIVO

El ejército burgués mexicano es la principal columna vertebral para el sostén de la dictadura del capital, su función es ejercer la violencia de clase, no obstante, en este momento histórico del país caracterizado por la farsa electoral, la pandemia y lo convulso de la crisis económica capitalista, su labor destaca como instrumento de control social y la persistencia de prácticas de terrorismo de Estado.

A través de la imagen difundida en los medios de comunicación, el ejército es presentado como benefactor de los oprimidos al depositar en sus manos parte del destino de la salud del pueblo.

Usar al aparato represor para *resguardar* la salud de los mexicanos con relación al fenómeno pandémico, implica aplazar sobremanera el tiempo de vacunación a la población, este hecho es una señal que reafirma lo socavado del derecho a la salud de los oprimidos, así como de la abierta intención del régimen por otorgar carácter policiaco militar a su Plan Nacional de Vacunación.

Las llamadas *Brigadas Correccaminos* realizan las inoculaciones, están constituidas por 12 integrantes, entre ellos cuatro elementos de las Fuerzas Armadas (la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional), esto significa militarización y prácticas contrainsurgentes so pretexto de proteger la vida de millones de pobres del país.

El desarrollo de los acontecimientos indica que el Estado policiaco-militar está por encima de las autoridades de salud, en su defecto, la Secretaría de Salud paradójicamente se

sujeta a los tiempos, normas y formas de las Fuerzas Armadas.

La política de salud de la junta administrativa en *tiempos del Covid-19* está remozada por las fuerzas policiaco-militares, la administración de las vacunas en manos de éstos alberga un carácter contrainsurgente, la dotación de las dosis a la población pasa forzosamente por el tamiz del corporativismo político con el puntal de las fuerzas represoras y el contexto electoral.

De esencia constituye un mecanismo de control social, esto se advierte como medida para someter al pueblo al silencio ante los brotes de descontento popular por garantizar el derecho a la salud del pueblo.

Las condiciones de precariedad material de los sectores populares, aunado al deplorable estado del sistema de salud revelan cómo la crisis taladra la condición material de las masas, dado que las pérdidas humanas superan las cifras oficiales, mientras tanto, entre demagogia y militarización es lenta la inmunización de los millones de explotados.

Los hombres del régimen hacen de las fuerzas armadas capital político y crean condiciones para imponer más medidas autoritarias, de tal modo que los ríos de descomposición de la democracia burguesa contaminan el ambiente del país.

Quien preside el Ejecutivo federal comete faltas a la verdad con relación a la actitud de las fuerzas represoras al referir que éstas “contribuyen” para “(...) ayudar a México a salir adelante” en el contexto de la pandemia, cuando son las masas explotadas quienes forjan su futuro más no aquéllos; el papel del



ejército burgués es de simulación para limpiar su imagen y sujetarse a los designios de la dictadura del capital.

El pueblo no requiere de hombres armados al servicio del poder burgués para garantizar su derecho a la salud, sino de un gobierno que garantice condiciones materiales dignas para las masas trabajadoras, por tanto, las Fuerzas Armadas no protegen a las familias proletarias de la nueva cepa viral porque no son médicos, por el contrario, aplican un doble rasero: mientras militarizan una tarea del sector salud, perpetran la violencia de clase.

El panorama descrito explica la crisis política y económica del régimen, devela cómo se crean las condiciones para imponer medidas autoritarias que redundan en control social, paralelamente a la persistencia de prácticas de terrorismo de Estado por elementos castrenses en regiones de Oaxaca y el estado de Guerrero.

Parte de la militarización queda al descubierto con el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y grupos paramilitares en la entidad oaxaqueña, éstos exigieron militarizar la región con el argumento de salvaguardar su integridad física y psicológica, sin embargo, se traduce en complicidad y la persistencia de determinadas prácticas violentas por parte de las corporaciones policíaco militares para infundir terror al pueblo.

En determinadas comunidades de la entidad guerrerense, no cesa la práctica de las desapariciones forzadas, el despojo violento de tierra y sus recursos naturales, este fenómeno prueba la constante práctica de la violencia contra el campesino pobre, sus perpetradores son grupos paramilitares y el ejército mexicano.

Paramilitares y fuerzas represivas no descansan, la violencia de clase persiste, la inmunidad es inherente a ella por la legalidad burguesa, por ende, solamente los incautos,

oportunistas y reformistas defienden a los verdugos del pueblo.

Nada hay de benevolente en el comportamiento del ejército burgués, su actitud está en función de ganar la simpatía de ingenuos, despolitizados y material para la verborrea reformista, porque la sociedad capitalista está inmersa en un revés tras otro a causa de las marejadas perniciosas de la crisis capitalista y la pandemia.

Las Fuerzas Armadas no son protectoras del pueblo, están sujetas a los planes del Estado burgués, fungen su papel de ejecutar órdenes para sostener al régimen, no hay “soldado humanista” sino una pieza represora para contener el descontento popular; con la distribución de las vacunas anti-Covid-19 practican medidas contrainsurgentes y el intento por limpiar la imagen de aquéllos, no obstante, persisten los crímenes de lesa humanidad.

El derecho a la salud entre la demagogia y las formas burguesas de hacer política

El derecho a la salud en la presente coyuntura con relación al plan de vacunación está fincado en los intereses de los monopolios farmacéuticos, por lo tanto, los oprimidos soportan las consecuencias de la crisis capitalista y los intereses mezquinos de la oligarquía; el conjunto de los oprimidos está en la indefensión al no tener pleno acceso a la salud.

El acceso a la vacuna se convierte en una disputa por quien controla su distribución, esto genera que países sometidos al imperialismo se sujeten a los tiempos de éste, lo cual genera mayor dependencia como es el caso de México.

La producción y distribución de vacunas a nivel internacional lejos de tener un carácter humanista, se sumerge en la voraz lógica mercantilista por el control del mercado. Se evidencia el papel de los países imperialistas



como Estados Unidos y los que conforman la Unión Europea que dosifican su distribución, de lo anterior se explica la lentitud para la inoculación masiva del patógeno en nuestro país.

En un inicio se destinaron 35 mil millones de pesos para la precompra de vacunas a los monopolios norteamericanos e ingleses, ésta es una cantidad pírrica que no satisface la demanda de la población, hecho que refleja el carácter demagógico de la administración federal, so pretexto de la condición recesiva en que se encuentra la vida económica en el país.

La demagogia de los hombres del régimen es una constante al analizar cómo se ejecuta la política pública en materia de salud, porque en los hechos entre el discurso y la práctica, se revela que no hay certeza de que los fondos sean suficientes para cubrir las necesidades que exige la pandemia.

Destinar 32 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar en la compra de vacunas y gastos relacionados a la pandemia, implica dejar en vulnerabilidad a otros sectores de la población con enfermedades crónico degenerativas. Este fenómeno deja al descubierto la magnitud del desmantelamiento del sistema de salud y al desamparo a las masas que padecen pobreza y miseria.

Los costos de la crisis económica y la pandemia en México son irrefutables, el botón de muestra es la contabilización hasta el 10 de febrero de 169,760 defunciones, de esto se desprende que, en las últimas 24 horas a la fecha citada, se sumaron 1,328 muertes más, esto significa que no hay seguridad social para el pueblo.

Las causales explicativas de los miles de decesos por la pandemia no yacen únicamente en la ineficaz política sanitaria, la dependencia económica al imperialismo, sino en cómo el derecho al trabajo, la salud y la alimentación

de millones de familias proletarias al ser negados por la contingencia sanitaria derivan en que éstas sean las principales víctimas del SARS-CoV-2.

Un ejemplo es la miseria y pobreza en la que viven los oprimidos en el Valle de México, región del país que, a decir de las cifras oficiales, concentra la mayor cantidad de muertes por Covid-19. Sin contar los registros del resto de las principales metrópolis donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores asalariados, ésto es consecuencia de lo detestable de las formas burguesas de hacer política.

El gobierno impone la política sanitaria de “quédate en casa hasta que te vacunes” pero no garantiza el derecho al trabajo y de seguridad social, al respecto, en este contexto, el registro del IMSS cuantificó la pérdida de 709 mil 211 empleos formales, sin contar las cifras de la población que se encuentra en la economía informal y el subempleo.

El derecho a la salud transita entre paliativos y verborrea, ya que no se ha garantizado lo que tanto se propagó en campaña, puesto que se han registrado 84,592 personas con esquema completo de vacunación, esto representa tan sólo el 0.067% de los más de 126 millones de mexicanos quien tiene acceso a la vacuna –lo constituye esencialmente el sector salud y adultos mayores-, esto demuestra la perversidad del régimen; medra con las expectativas de los explotados para obtener raja política en la antesala de la farsa electoral.

Nada es fortuito en los marcos corrosivos de la política burguesa, de ahí la insistencia de la actual administración para que el ejército mexicano administre y distribuya las vacunas, de esa manera crea falsas expectativas en los sectores pauperizados, expone avances que en realidad demuestra la pusilanimidad y mezquindad de los hombres del régimen.



Si son los hombres armados del poder burgués quienes albergan los antígenos, esto implica cerrar filas de quienes hoy administran los intereses oligarcas, esto a su vez, refleja la contradicción entre grupos de poder político y económico porque las vacunas en la presente coyuntura, son utilizadas como mecanismo para corporativizar y medrar con las necesidades de amplios sectores populares.

El escenario para los explotados no es favorable en materia de salud, se prevén mayores costos en vidas humanas por el Covid-19 mientras se imponen los intereses oligarcas y los vientos autoritarios que soplan en el país, en este sentido, basta mencionar que el Plan Nacional de Vacunación está supeditado a la lógica policíaco-militar, por consiguiente, paso a paso se configuran más medidas profascistas.

En tiempos de crisis emerge la descomposición política, esto explica la actitud del régimen por mantener los programas asistencialistas, sobre todo, cuando lejos de garantizar salud para el pueblo, las directrices de la política de gobierno están determinadas por las exigencias del capital monopolista transnacional, esto deriva en colocar en segundo término el devenir de los explotados.

El frío cálculo de los politicastos en su “abnegado” optimismo por contener los contagios, revela una práctica transexenal, la corporativización política, otorgar canonjías, compra de conciencias, mediatizar todo brote de descontento popular, en consecuencia, el asistencialismo es otra pieza del ajedrez de la clase dominante.

Los programas asistencialistas aplicados en 2020 bajo la lógica de responder a las consecuencias de la contingencia sanitaria, consistieron en otorgar créditos, entre otros paliativos económicos que constituyen jugosos

negocios para la banca nacional e internacional, que es lo mismo, la voracidad del capital financiero en detrimento de los pobres y miserables del país.

Si la realidad es incuestionable con relación al aumento del desempleo, pobreza y miseria, los paliativos económicos llegan para sujetar a los “beneficiarios” a la normatividad del capital financiero, más que prevenir los contagios y garantizar la existencia de las masas proletarias, es un fenómeno que desemboca en contener la crítica política de las masas, condenar al pueblo al silencio y al recrudecimiento de la opresión política.

La expresión descarnada de la contradicción entre capital y trabajo lo vivimos los millones de explotados y oprimidos en este momento histórico del país, porque nuestros derechos humanos y constitucionales son escamoteados por la primacía que otorga el gobierno a los intereses oligarcas, en medio de la hecatombe dimanada de la pandemia y las contradicciones inherentes de las leyes del desarrollo capitalista.

Quedarse en casa sin garantías de seguridad social, derecho a la salud, educación, alimentación y trabajo es una política antihumana, degradante, limita al sujeto creador, cercena la iniciativa, por esto, está justificada la crítica política de las masas en la lucha por una vida digna.

Desde nuestra trinchera, saludamos toda iniciativa de los explotados por romper el azoramiento impuesto por la política sanitaria del Estado burgués mexicano, la justicia burguesa entre paliativos y demagogia niega el derecho a la salud y atenta contra el derecho a la vida del pueblo, de esa magnitud exige la combatividad de los oprimidos con disposición de luchar. El capitalismo significa muerte; el socialismo, la dignificación del hombre.

vdpr-epr



LA LUCHA CONTRA EL SARS-COV-2 Y LA DEMOCRACIA BURGUESA

La inmunidad artificial contra la enfermedad causada por la nueva cepa viral SARS-CoV-2 coloca de relieve las miasmas de la democracia burguesa y los políticos de oficio; devela la maniobra perversa de todas las nomenclaturas partidistas para impulsar una política nefasta que reditúe mejores reflectores mediáticos y una amplia masa de incautos como base clientelar.

El propósito de gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores para acceder de manera independiente a las diversas fórmulas que hasta ahora han alcanzado los laboratorios farmacéuticos por medio de sus respectivos partidos políticos, es con el interés de emplear el fármaco a conveniencia de sus aspiraciones electorales, con ello asegurar el curso de su carrera política.

A lo largo de un año que ya se extendió el fenómeno pandémico a nivel mundial y los efectos perniciosos en las masas trabajadoras de nuestro país, políticos de oficio y sus respectivas siglas partidistas pretenden medrar aún más en el nombre de la enfermedad de moda. El descrédito es de tal magnitud que ilustra la crisis política del régimen; la burla, la maniobra, la demagogia, el escarnio... sobresalen como botón de muestra de la esencia pútrida de las formas burguesas de hacer política.

Con el ardid de avanzar con más celeridad en la inmunización colectiva contra el Covid-19, gobernadores y presidentes municipales pretenden establecer sus propias relaciones con las diferentes patentes de fármacos, esta intención en apariencia de preocupación por inclinar la balanza en favor de la salud, esconde el interés de utilizar mediáticamente la inmunización artificial y como trampolín político en sus mezquinas aspiraciones de cara al próximo proceso de remozamiento de la democracia burguesa.

La fetichización del Covid-19 no sólo permitió a la actual junta administrativa imponer medidas autoritarias y represivas en nombre de la salud, hoy es empleado para escalar peldaños más altos de la corroída democracia capitalista. Ganar simpatía popular con el embuste de por medio y con el cinismo como carta de presentación, es propio de personeros ungidos en las entrañas del régimen sin un ápice de identidad con el pueblo.

No hay identidad con los intereses populares y las ambiciones que mueven a las creaturas del régimen; ayer fueron despensas, hoy son cubre bocas, gel y otras supercherías como armas para enfrentar la pandemia, pero en su otrora pasado avalaron leyes que privatizaron la salud y la convirtieron en un jugoso negocio para la oligarquía nacional.

En los países dependientes al imperialismo el antídoto llega a cuentagotas, mientras que las naciones con mayor desarrollo utilizan su poder económico para acaparar esta mercancía con un amplio potencial de realización. Nuevamente son las masas desposeídas las condenadas a perecer, aun y cuando el desarrollo de las fuerzas productivas permite resolver la virulencia del nuevo patógeno en una brevedad considerable, con esto queda expresado el carácter inhumano y depredador del capitalismo.

Un año bajo el marco del fenómeno pandémico permite advertir con claridad la manera en que la salud humana es mercantilizada y reducida a un aspecto que se puede adquirir en función de una relación meramente comercial. La política neoliberal impulsada por los partidos políticos y sus personeros permitieron privatizar derechos constitucionales, de ello se desprende la cantidad de defunciones cuyo origen es la imposibilidad de acceder a una atención adecuada de forma inmediata.



La pugna entre las grandes farmacéuticas por ganar la carrera en el descubrimiento y producción del biológico terminó con el resultado de varias fórmulas, sin embargo, su producción en serie y distribución masiva está en función del saldo favorable que genere a las arcas del capital monopolista transnacional y no en el deseo de salir lo más pronto de esta situación de consecuencias incuantificables.

El avance del combate a la pandemia permite ver con nitidez la ralea de la que presumen partidos políticos como el PRI, PAN y PRD; hoy vociferan por el manejo gubernamental de la pandemia, se desgarran las vestiduras como incansables promotores de la protección de la salud para los mexicanos, pero fueron estos partidos políticos burgueses quienes avalaron la imposición de las reformas neoliberales que dieron la estocada al sistema de salud público.

Sobre la tragedia humana que significan los miles de muertes cuya característica común es la identificación de la víctima en su condición de pobreza y miseria, el saldo deleznable tasado en más de 180 mil decesos está íntimamente relacionado con la precarización de las condiciones materiales de existencia del pueblo mexicano, lo que convierte el devenir en un escenario de por sí adverso, máxime cuando el contagio llega, para un jodido significa tener un pie en el hoyo.

Hacer carrera política sobre la tragedia, sobre el dolor de las víctimas es una característica de los políticos de oficio. La doble moral que los distingue le impide expresar algún rubor cuando pregonan hasta el hastío de que los militares deben regresar a sus cuarteles, se escandalizan por las cifras de muertes violentas, claman castigo por la desatención en el sistema de salud, pero omiten que ellos son los responsables directos de una situación de esta naturaleza producto de la imposición de la política neoliberal.

La preocupación de los políticos de oficio por el desenlace fatídico que genera el Covid-19 en nuestro país significan falsos golpes de pecho,

esto es sólo el elemento superfluo de su criticismo, porque en su otrora pasado votaron o avalaron las leyes que permitieron la conducción del país por la senda de la dependencia económica y el subdesarrollo. El antecedente inmediato del escenario que asola al país es la imposición sistemática del neoliberalismo como política económica del imperialismo.

Las víctimas del Covid-19 son víctimas de la política económica que todo lo trocó en una vil mercancía. El sistema público de salud vivió un sistemático desmantelamiento que condujo a su privatización, por ello, el desabasto en hospitales, la falta de instrumental médico e insumos para ganar la batalla contra la nueva cepa viral. El interés oligarca hoy figura como ley a costa de la vida de millones de proletarios.

Mientras predomine la política neoliberal, resultará complejo salir airosos ante fenómenos sanitarios o de cualquier otra índole, los mexicanos explotados y oprimidos no tenemos las mismas oportunidades que los explotadores y oligarcas. La historia que se repite entre los asalariados es un discurrir en los hospitales públicos saturados, contagiados regresados a sus hogares para esperar la suerte de superar la afeción o perecer silenciosamente.

Emergen contradicciones que sólo tienen explicación en el carácter antipopular de las disposiciones gubernamentales. Al pueblo se le castiga denodadamente su incumplimiento de las medidas sanitarias, pero no sucede lo mismo cuando un subsecretario o titular de cierta dependencia no acata sus propias disposiciones, ellos tienen manga ancha para no acatar los protocolos sanitarios impuestos por la actual administración.

El titular del Ejecutivo federal sigue movido por sus actos voluntariosos, su actitud devela que siempre buscó el contagio del virus, para que una vez que superara su suplicio, emerger como un cuasi redentor que pudo salir victorioso de un mal cuya cifra de decesos se suma a las muertes por hambre y miseria.



Sostener que debía salir a trabajar como la mayoría de las masas proletarias es un absurdo. Su condición como jefe de Estado no tiene parangón con lo que discurre en la cotidianidad de un hogar proletario. Él recibe todas las atenciones, los mejores especialistas, en tanto el pueblo, debe hacer largas filas en espera de que haya la disponibilidad de una cama, y cuando ésta llega, significa que hubo otro de su misma condición que expiró el último aliento en la lucha contra la multicitada enfermedad.

El ejemplo más ilustrativo está en las atenciones que recibió el oligarca Carlos Slim Helú, sus posibilidades de salir airoso del contagio nunca fueron semejantes a las de un proletario, sólo baste observar las enormes filas para conseguir un tanque de oxígeno o una cama con ventilador en un hospital, situación que no padeció el oligarca citado.

Las miserias de la democracia burguesa y sus personeros son más nítidas en estos tiempos definidos como “crisis sanitaria”, la conclusión que emerge es que del capitalismo sólo pueden surgir más y nuevos males para las masas trabajadoras, por ello, la necesidad ilustra la transformación radical de esta formación socioeconómica como única manera de garantizar la adaptación creativa del ser genérico al movimiento biológico de la materia.

Sistema de salud en México producto del neoliberalismo

El sistema de salud en México está desmantelado producto de la política de gobierno fincada en el neoliberalismo; crisis no superada también por la incapacidad de la actual junta administrativa que beneficia al gran capital, esto hace que el acceso pleno al derecho de la salud sea difícil para millones de pobres y miserables del país.

Una de las consecuencias de la política de los anteriores gobiernos y el actual es la falta de creación de nuevas plazas permanentes para los trabajadores de la salud, las condiciones precarias en la que laboran, los bajos salarios, la sobrecarga laboral, las relaciones laborales

degradantes y la falta de material médico. Esto reafirma lo socavado de las instituciones de salud, que al mismo tiempo legitima la privatización y dan continuidad a dicho proceso.

Una de las causas que explican la actual condición del sector público de salud es la política educativa de las instituciones que forman médicos que consiste en la reducida matrícula en éstas, lo que configura elitismo y discriminación.

Las instituciones públicas y privadas están sujetas a la lógica neoliberal, por lo tanto, la salud pública no es prioridad en sus planes y programas de estudio, esto genera la formación de futuros galenos, en su mayoría, sin sensibilidad humana. Estas instituciones educativas no forman médicos con vocación profesional, su móvil principal es lucrar con los padecimientos de los enfermos.

Esa formación es lo que explica la actitud negativa de los trabajadores del sistema de salud que no acuden a su trabajo por temor a contagiarse de Covid-19; la actitud de superioridad y vanidad, no representa el juramento de Hipócrates, no atienden a paciente alguno si no hay dinero de por medio, sólo unos pocos de ese universo están plenamente comprometidos con su profesión.

Los “héroes” que están en primera línea de combate, como osan expresar los políticos de oficio, es una falacia, aquellos trabajadores de la salud quienes entre prejuicios o temores infundados abandonaron su trinchera, expresa el nulo compromiso con la salud del pueblo y lo insostenible de su concepción acerca de los fenómenos naturales y sociales.

Los programas y la precaria situación del sistema de salud, demuestran la omisión de las instituciones educativas, la falta de interés de formar a médicos con un alto sentido ético y moral, que refrenden su compromiso humanista consigo mismo y con el pueblo.

En las pasadas administraciones, tanto panistas como priistas, se desmanteló y se



fomentó la privatización del sistema de salud, así como el parasitismo social con las dádivas del asistencialismo; en la actualidad con la autonombra "4T" no hay ninguna diferencia, a pesar del discurso, persiste la demagogia a la vieja usanza de sus antepasados prehistóricos.

Esto demuestra el carácter transexenal de las políticas neoliberales, sin importar el partido en el poder, son para el beneficio de los grupos de poder político y económico. A los políticos de oficio no les interesa la vida del pueblo trabajador, prueba de ello es la implementación de una política sanitaria ineficaz en el contexto de la pandemia.

Para botón de muestra son las condiciones deplorables en las que se encuentran los hospitales en el país, además de la construcción de hospitales sin el equipo médico necesario para atender a los pacientes, que resultan verdaderos elefantes blancos, la falta de material médico y medicinas para la atención de todo tipo de enfermedad, lo increíble, hospitales sin paracetamol.

Del 2019 a la fecha el país registra la muerte de cientos de miles de mexicanos por enfermedades crónico degenerativas, éstas son un ejemplo de los miles de muertes producto de enfermedades que engendra la pobreza y la indolencia institucionalizada, aunado el costo en vidas provocado por el SARS-CoV-2, la gran mayoría de esas muertes son pobres y miserables del país.

México figura en la lista de los países con altos contagios por Covid-19, el cual tiene cerca del 9% de mortalidad de los infectados, un hecho que evidencia este fenómeno es la falta de un plan eficaz de seguridad social.

La crisis del sistema público de salud no es por la pandemia, éste arrastra deficiencias estructurales desde los sexenios del PRI y PAN, producto de la política neoliberal aplicada en cada una de sus administraciones, pero esto no quita responsabilidad al partido del cual emana

la actual administración como quiere hacer ver su representante en el poder, no son sólo problemas heredados por las pasadas administraciones, sino consecuencia también de la continuidad de la misma política hecha Ley. Navega con bandera de gobernar para los pobres, cuando aumenta la tasa de la población en situación de miseria que no tiene acceso a la salud, vivienda, alimentación y educación.

México está sujeto a los designios del capital internacional, esta condición hace aún más deplorable el sistema de salud, como vino a evidenciar la presente coyuntura, y de manera específica hoy la actual administración se enfrenta a severas dificultades para adquirir las vacunas, debido a las restricciones impuestas por los monopolios farmacéuticos internacionales. En este contexto, la prioridad es el país imperialista y después el país dependiente.

La dependencia al imperialismo demuestra que el interés de los monopolios no son los más pobres, sino el enriquecimiento que se genera a costa de ellos, como la mercantilización de la salud.

En México las instituciones de salud deberían tener como política prevenir las enfermedades y no sólo curar "el mal", no esperar a que éste evolucione a un padecimiento crónico para resolverlo.

Cuba es un ejemplo de cómo en la adversidad se puede garantizar salud al pueblo, su población registra pocos contagios del Covid-19 y muertes, tiene una tasa de recuperación muy alta, esto es posible por los principios de un Estado socialista, en éste no se ve al enfermo como mercancía, hay un trato humano, y su prioridad es el paciente, debido a la política de prevención y cultura del deporte.

La anterior como otras revoluciones socialistas en el mundo, revelan la necesidad de encausar los esfuerzos del pueblo trabajador por su emancipación del yugo capitalista.

pdpr-epr



ESTADO DE DERECHO BURGUÉS PARA GARANTIZAR IMPUNIDAD

Los artilugios leguleyos del estado de derecho burgués que garantizan impunidad a burgueses y políticos de oficio, confirman el carácter y esencia del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Sin recato alguno los extraditados son exonerados, llevados a hospitales como antesala para ser liberados; cuando mucho algunas horas en prisión preventiva.

Los hechos dan cuenta también del carácter de las instituciones del Estado mexicano, en particular de la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos de Emilio Lozoya Austin exdirector de PEMEX, Alonso Ancira Elizondo dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y de Rosario Robles Berlanga extitular de SEDESOL.

Es innegable que los dichos en las conferencias mañaneras de “cero impunidad” en lo que va de la presente administración morenista es demagogia pura; discurso para confundir a las masas que fincaron sus esperanzas en un personaje y partido político que se presenta como gobierno del pueblo.

Acogerse al “criterio de oportunidad”, negociar la libertad a través de “acuerdos y convenios”, “declararse culpable y ser colaborador”, expresa el doble rasero de la justicia burguesa; porque para unos la cárcel y la criminalización es el pan de cada día, para otros el beneficio que redunda en prebendas y ganancia.

“Beneficios jurídicos”, “sentencia mínima”. La ley burguesa se afina para beneficiar a delincuentes de cuello blanco porque con ello se

deja intocables a los de mayor rango, es el caso de Enrique Peña Nieto quien fue jefe del Ejecutivo federal cuando se desviaron miles de millones de pesos, robo y saqueo del erario público.

Criminales de Estado, altos mandos del ejército mexicano, delincuentes de cuello blanco, políticos de oficio represores son tratados con los criterios más refinados del estado de derecho burgués. No así con el pueblo, pues las cárceles están llenas de trabajadores, rehenes políticos, presos por motivos sociales, aquellos hombres y mujeres que hacen crítica política al régimen. Un botón de muestra es el encarcelamiento de la activista y defensora de los derechos humanos Kenia Hernández, la abogada Susana Prieto; hombres y mujeres que luchan por la defensa de la tierra y por el socialismo en México.

El gobierno de la 4T, a través de la FGR dejó en libertad al General Salvador Cienfuegos, pero no escatima recursos para mantener a cientos de presos políticos en las cárceles del país, se esgrime para tal efecto el sofisma de “cero impunidad” cuando el pueblo se organiza y lucha combativamente por sus derechos conculcados.

No hay diferencia entre la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la actual administración. Aquéllos protegieron a criminales de Estado tales como el genocida Felipe Calderón Hinojosa, a Genaro García Luna; con Jesús Murillo Káram cobijaron a altos mandos del ejército mexicano para no ser señalados responsables directos de desapariciones forzadas.



No hay duda del fortalecimiento del estado de derecho burgués con el cual se dirimen pugnas interburguesas; la competencia entre politicastos que aspiran a ser verdugos del pueblo en defensa del capital, sin embargo, al pueblo para defenderse ante las injusticias sus posibilidades son reducidas hasta el límite del desgaste entre el burocratismo, dilación y la indiferencia.

El estado de derecho burgués es la defensa a ultranza de los intereses oligárquicos; control político y poder económico de los partidos políticos electoreros; continuidad del régimen neoliberal.

De ahí que cualquier ciudadano que proteste cae en las garras del Estado, se le niegan todos sus derechos desde el primer momento de su detención. Para las masas empobrecidas no hay atenciones especiales, cuidados especiales, la atención médica en las cárceles es una quimera. Contrario al trato que reciben politicastos y burgueses.

Artifugios leguleyos del estado de derecho burgués que se aplicaron con la imposición del régimen neoliberal en el país, los cuales se modifican de acuerdo a la coyuntura política, social y económica.

Fenómeno que permea en las fiscalías estatales donde se premia con la impunidad a represores del pueblo, mientras en los medios de comunicación repiten la consigna de “no habrá impunidad”

para quienes violen las leyes y el estado de derecho. Esto en los hechos es continuar con la criminalización de la inconformidad de las masas populares que va en aumento por las propias condiciones materiales de vida.

El objetivo es claro, preservar el interés del capital, mantener en la inmovilidad a las masas trabajadoras y castigar a todo aquel que se atreva a ejercer crítica política contra el régimen.

Si este es el actuar del Estado burgués mexicano desde sus estructuras e instituciones, por tanto, la tarea del conjunto del movimiento popular es construir la unidad de los explotados y oprimidos. Construir organismos de combate popular, ejercer el derecho a la autodefensa armada de las masas.

pdpr-epr



“...la tarea del conjunto del movimiento popular es... Construir organismos de combate popular, ejercer el derecho a la autodefensa armada de las masas.”



REFORMA A LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, MEDIDA PROFASCISTA

La reforma a la Ley de vías generales de comunicación es una medida profascista, que esta junta administrativa intenta consolidar lo ya iniciado en el sexenio pasado, representa la concreción de los planes por mediatizar y corporativizar el descontento popular. La esencia de esta disposición es criminalizar la protesta popular y aplastarla con la fuerza policíaca militar.

La modificación jurídica y política plantea sancionar con cárcel de 3 meses a 7 años a quienes desde la lógica de los hombres del régimen parapetados en el poder Legislativo, significa atentar contra las vías generales de comunicación, es decir, las demandas populares son abiertamente consideradas actos criminales, un atentado contra la sagrada propiedad privada.

En estos casos la justicia burguesa es ruín, su preocupación es por los intereses oligarcas y no las exigencias de las masas, porque desde su concepción protestar es violentar el estado de derecho burgués, con esa mezquindad fundan argumentos leguleyos como considerar que exigir justicia o demandas populares es “obtener lucro”.

Los sectores organizados del pueblo recurren a su derecho legítimo a la movilización, obligados por la violencia de clase, la miseria, la impunidad y la actitud perversa del gobierno al ser omiso en la solución de las demandas concretas, por esto, protestar se vuelve una necesidad ante los crímenes que se cometen contra las masas oprimidas y explotadas, porque la justicia no se alcanzará ni en los tiempos ni en los marcos de la institucionalidad burguesa.

La precarización material de las masas sustenta una causa irrefutable que deriva en

creatividad para superar las medidas leguleyas del poder burgués, para esto todas las formas de lucha que emanen del pueblo son legítimas y necesarias para arribar a otras formas superiores de organización en aras de lograr su emancipación.

Las vías de comunicación terrestres y aéreas forman parte de los medios de producción, esto se traduce en ganancias para la burguesía porque no sólo las administra a través de concesiones otorgadas por el Estado, sino también son puntos medulares para la circulación y realización de mercancías.

Su “toma o bloqueo” significa pérdidas cuantiosas para la oligarquía, porque la realización de las mercancías es más lenta, de ahí que exigen a gritos la aplicación del Estado de derecho contra los sectores movilizados, porque la crisis exacerba su voracidad, esto deriva en violencia de clase contra aquel que ose manifestarse.

El Estado de derecho significa la defensa a ultranza de los intereses oligárquicos, para garantizar el carácter expoliador del capital monopolista transnacional a costa de la explotación y la vida del pueblo trabajador, con esto no hay lugar a dudas, la justicia burguesa niega los derechos fundamentales de los oprimidos.

Ante la movilización de las masas organizadas en las vías de comunicación en demanda de derechos económicos y políticos, los hombres del régimen con las reformas de Ley fortalecen el estado de derecho oligárquico, a su vez, crean las condiciones con el objetivo de justificar el despliegue de las fuerzas policíaco militares para reprimir.



Ejemplo concreto fue la manifestación de los trabajadores de la educación en Michoacán, que alrededor de seis meses se manifestaron en las vías del tren, en demanda del pago de salarios devengados, tiempo en el que la oligarquía nacional y extranjera exigió la intervención de las fuerzas represivas para proteger sus intereses.

La burguesía en el plano nacional en ese momento exigió que todo bloqueo de vías de comunicación se desaloje en un máximo de dos horas; que se castigue a los “infractores de la ley” con siete años de prisión, sin derecho a fianza”, irónicamente es lo que establece la actual ley producto de la reforma.

La iniciativa de reforma de Ley en cuestión es otro ejemplo de cómo ésta obedece a los intereses monopólicos, éstos recurren a la dictadura de opinión para impulsar campañas mediáticas contra quienes ejercen su derecho a protestar generalizándolas como “robo” o “huachicoleo carretero”, entre otros apelativos propios de la prensa burguesa, esto se traduce en el papel nefasto de los medios de comunicación para criminalizar las demandas legítimas de los sectores populares.

La construcción y ampliación de las vías generales de comunicación son de interés para la burguesía, por tanto, los intereses oligarcas están ligados en este sector, de ahí que esta reforma responda a las exigencias del capital. Las carreteras concesionadas a la iniciativa privada no obedecen a los intereses del pueblo, ni las vías férreas privatizadas benefician a las masas trabajadoras.

Hay una clara intención desde Palacio Nacional por mediatizar y corporativizar el descontento popular cuando señala “nada por encima de la ley, todo por la vía del derecho”.

Pero la legalidad burguesa no es para el pueblo, ésta se modifica y aprueba desde los recintos legislativos del régimen, donde los partidos electoreros obedecen a los designios oligarcas.

Esto explica la razón por la que Acción Nacional y Morena se alían para promover y modificar el marco jurídico, esto significa la inexistencia de “oposición”, por el contrario, demuestra su hipocresía, lo fétido de la descomposición política, lo servil a los designios del capital monopolista transnacional porque ahí donde existe crítica política de las masas se criminaliza el derecho a disentir.

Conducir el derecho a disentir de nuestro pueblo sólo por los estrechos marcos de la legalidad burguesa implica perversamente aceptar la opresión política, significa negar la necesidad de emancipación popular, por esto, intentan arrebatar banderas de lucha para corporativizarlas por la vía parlamentaria con la creación de disposiciones profascistas que consisten en: si no te mantienes servil, te rompo la voluntad con represión.

En tanto no haya solución real a las demandas del pueblo, éste emprende formas de organización y combate como vía de expresar su inconformidad y derecho en la justa exigencia de la solución de sus demandas.

Las masas explotadas y oprimidas tienen dos caminos a seguir en la lucha contra las medidas profascistas: por la senda del reformismo o que resplandezca la creatividad de las masas que deriven en la combinación de las diferentes formas de lucha, esto implica que el movimiento popular transite por la senda de la lucha independiente combativa hasta lograr saltos cualitativos que arriben a la lucha armada revolucionaria.

vdpr-epr



LOS VENEROS DE LA CORRUPCIÓN

Los veneros de la corrupción inundan el río de descomposición política que vive el régimen; políticos de oficio y empresarios caídos en desgracia, ilustran el albañal que significa la democracia burguesa. El chantaje político y el jaloneo por mantener cotos de poder hace perder todo signo de cordura para simular un decidido combate a un fenómeno inherente al régimen que genera iniquidad social.

Cada junta administrativa señala el enemigo a vencer, la actual insiste en combatir a la corrupción como el enemigo de todos los mexicanos, sin embargo, lejos de poner fin a este “mal” inherente al modo de producción capitalista, los efectos que hoy saltan a la palestra pública de más de tres décadas de la ejecución de la política económica neoliberal, son fiel testimonio de las formas burguesas de hacer política.

Fenómenos de corrupción son “descubiertos” por medio de indagatorias judiciales y financieras en un afán de avanzar en la cruzada contra este mal, en contra partida, son desechadas las acusaciones contra altos mandos militares vinculados directamente al cometido de crímenes de lesa humanidad y al negocio de estupefacientes como parte de la economía subterránea del régimen.

No hay duda de la protección que goza la columna vertebral que sostiene lo inicuo del Estado burgués mexicano, el destacamento especial de hombres armados que salvaguardan la reproducción y desarrollo del capital en nuestro país es immaculado con un halo de santidad que garantiza impunidad perpetua.



Una intrincada red de operaciones bancarias ilustra con gran nitidez que las relaciones capitalistas donde media el equivalente universal, es capaz de trocar todo en su contrario, dinero ilícito engrosan las cuentas de políticos de oficio y empresarios en los denominados “paraísos fiscales”, que los hace emerger como prominentes hombres de negocios. Una fortuna obtenida mediante truculentos tratos, ilustra la podredumbre que da sustento al capitalismo. No es difícil advertir a un grupo empresarial detrás de estos movimientos en la banca para el blanqueo de divisas u otra acción “ilegal”.

Combatir la corrupción sin cuestionar la base que da sustento al capitalismo es un acto de parafernalia que busca ganar reflectores mediáticos de frente a la jornada electoral intermedia. Toda riqueza acumulada por medio de la explotación lleva inherente su carácter inicuo, la corrupción no hace más que poner de relieve este hecho propio del régimen basado en la propiedad privada.

El castigo resulta una farsa, dado que el actual sistema penal acusatorio, como nuevo marco legal de la justicia burguesa, otorga amplias prerrogativas a delinquentes consumados, incluidos aquellos identificados como de cuello blanco, pero arremete con todo su sello de clase contra el explotado y oprimido. Contra estos últimos, no hay resquicio legal al cual acogerse, máxime cuando se trata del



sujeto crítico que ejerce su creatividad por medio de la crítica de las masas.

Emilio Lozoya, Alfonso Ancira... entre otros, están amparados a todos los vericuetos jurisdiccionales para eludir pisar la cárcel, el primero ni siquiera puso un pie en un penal, en tanto otros implicados como el ex dueño de Altos Hornos de México S.A., su libertad está garantizada, sólo es cuestión de tiempo, empero, contra el sujeto crítico, la cárcel es el ariete represivo para anular la voluntad popular de combatir, espacio y tiempo en el que es sometido a diversos flagelos.

No hay descubrimiento alguno en la presentación pomposa de los implicados en el cometido de actos de corrupción, el frío cálculo político y económico está de por medio en el entreverado de las contradicciones no antagónicas entre grupos de poder político y económico.

Las miasmas de la política burguesa son cada vez más evidentes conforme avanza la crisis económica y ésta se trasfigura en la crisis política. Aquellos implicados en actos de corrupción y el cometido de crímenes de Estado siguen al amparo de la inmunidad que otorga el poder burgués. Su actitud camaleónica les permite estar investidos con cualquier sigla partidista para eludir la justicia, como ilustran los personajes tristemente célebres incluidos en la nomenclatura partidista encumbrada en la actual junta administrativa.

La justicia no se reduce en exponer las miasmas del régimen, por mucho que sean los millones desfalcados, no se puede comparar con la vida de los hijos del pueblo, hay miles de casos de crímenes de lesa humanidad que son obviados por la actual junta administrativa, por el contrario, la propuesta hecha a los familiares de víctimas es dar vuelta a la hoja, otorgar el indulto a criminales de Estado.

Para remozar las miserias del régimen no se escatiman recursos, el “quédate en casa” no aplica para intentar aceitar los oxidados engranajes de la democracia burguesa, inmunizados con su chaleco

que los identifica como siervos de la nación, andanadas de jóvenes son lanzados a la calle con el objetivo de corporativizar a las masas y convertirlas en base clientelar de la actual administración.

Una a una surgen las contradicciones, entre los llamados a protocolizar los requisitos para actualizar el padrón de votantes y la insistencia de asumir la muerte lenta en los hogares, existe un trecho enorme. Para oxigenar la democracia burguesa no hay protocolo sanitario que valga, no hay riesgo de contagio, todo con el sano propósito de romper con el creciente abstencionismo espontáneo y organizado que crece entre las masas proletarias.

Corrupción, continuidad de la violencia de Estado, el interés oligárquico por encima de los intereses de las masas trabajadoras, crisis política... son algunos aspectos que dilucidan la descomposición por la que atraviesa el régimen. En estas condiciones, justo es empezar a dilucidar entre las masas proletarias qué sentido tiene expresar en las urnas el descontento popular que no traspasa el muro de las lamentaciones.

La crisis política y descomposición del régimen es de tales magnitudes que las nomenclaturas partidistas utilizan la imagen de los bufones modernos en un intento tragicómico de ganar simpatía en los sectores populares. Más allá de contar o no con las capacidades para ejercer un cargo público, la crítica debe ejercerse en el sentido de que desde las entrañas del régimen no puede emerger el verdadero representante de las causas populares.

Votar ya no es opción, expresiones de descontento indican que existe una amplia base social donde el revolucionario debe ejercer su actividad constructora para construir base política que nutra el torrente de revolución socialista en nuestro país. El horizonte está claro, organizar y estructurar la voluntad popular de combatir que desemboque en la crítica de las armas para el asalto de la fortaleza capitalista.

vdpr-epr



LA ACTUAL DEMOCRACIA BURGUESA

De frente al actual proceso electoral resulta importante mirar una vez más a las pasadas elecciones en Hidalgo y Coahuila, el 18 de octubre, éstas expresaron de forma contundente los signos inherentes de la actual democracia burguesa, *el abstencionismo y el carro completo*, ratifican el carácter antipopular y autoritario de los procesos electorales en México.

Abstencionismo

El desarrollo y resultado de dichas elecciones locales fueron un indicador muy cercano a lo que puede acontecer en el próximo proceso electoral que culmina el 6 de junio de 2021. El abstencionismo se registró por arriba del 50 por ciento en la entidad del centro del país y en la norteña más del 60. Es claro que la indiferencia o apatía en estos tiempos no son las causas principales del abstencionismo, éste es producto de una determinación política que se asume y expresa en forma individual o colectiva.

La individual es la manifestación mayoritaria, no organizada de mujeres y hombres de los distintos sectores sociales que de manera recurrente opta por abstenerse de sufragar, es el mensaje de rechazo a los procesos electorales, a los partidos y políticos de oficio, al gobierno en turno; la decisión de no votar es el reflejo de un nivel de mayor claridad política, es romper en los hechos, aunque sea de forma temporal con el corporativismo de que son objeto.

No votar de forma colectiva en base a un principio político-ideológico es la manifestación de un acto consciente que se contrapone a las formas de organización burguesa, es la posición proletaria que impulsa la lucha por la transformación social del actual modo de producción fuera de toda expresión del corporativismo burgués.

El abstencionismo político es una forma de lucha que surgió en la vida política del país a partir de la organización independiente del pueblo, constituyó desde su origen un nuevo campo en la lucha de clases; la posición antielectoral consciente ganó terreno en la medida que se desenmascaraba el carácter perverso de la democracia burguesa; alternativa que emerge ante las posiciones reformistas que ahogan la voluntad popular de combatir en las grietas de la democracia burguesa.

La respuesta categórica de no votar por una parte del electorado en el pasado proceso electoral no puede ser catalogada como una “cifra desoladora”, constituye el rechazo a las elecciones, a los partidos políticos electorales y políticos de oficio.

El “inesperado” salto del abstencionismo es la manifestación concreta del desencanto del efecto electoral AMLO y Morena, ya que la junta administrativa en turno declaró “primero los pobres” como arenga de campaña y ahora sólo es catequesis desde el atril presidencial, porque en realidad la dirección de la “cuarta transformación” pasaba por la oficina del oligarca Alfonso Romo, en consecuencia las demandas de los sectores populares, los desposeídos, desempleados, familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y de organizaciones populares tienen que esperar turno.

Carro completo

Coahuila mantiene la “tradicción” priista de carro completo que refrenda la hegemonía de éste en la entidad, incluso en tiempos de la 4T, se llevó todos los distritos —16 diputaciones—, consiguió una diferencia cerca del 50 por ciento del total de los votos emitidos. Con sus matices y enjuagues en Hidalgo se repite dicha práctica electoral, de carro completo, pero disimulada por



testaferros políticos de la oligarquía local y del Revolucionario Institucional, PES y PANAL como los organismos visibles que harán bloque con el PRI.

Hidalgo y Coahuila, así como el Estado de México, Colima y Campeche son entidades en las cuales el Revolucionario Institucional nunca ha perdido una elección para gobernador, lugares donde la maquinaria del carro completo aún funciona. Cotos de poder del priismo que se pondrán a prueba al experimentar hasta dónde le alcanza su naturaleza de ser formador o padre putativo de todas las criaturas que conforma el espectro de la lucha electoral, en junio próximo, donde se disputan todas las elecciones locales y federales en 15 entidades.

Veracruz, para los priistas sería uno de esos estados reservorios importantes de votos para el PRI a nivel federal como lo fue hasta el 2018, sin embargo, en el ámbito local esta hegemonía empieza a desarticularse en 1988 al nivel de llegar a ser una de las principales entidades con bastiones perredistas e importante presencia en el Legislativo sin que esa posición le alcanzara para coronarse con el Ejecutivo local.

A partir de ahí, en territorio veracruzano las presidencias municipales se reparten entre PRI, PAN, PRD, PC, como los principales, pero el Ejecutivo estatal continúa en manos del priismo, fue hasta la denominada minigubernatura que mediante la alianza PAN-PRD que encabezó el expriista Miguel Ángel Yunez Linares llega a la gubernatura bajo otras siglas, siglas, sólo siglas distintas al PRI, pero la esencia es continuidad de la burguesía en el poder.

¿Qué pasó con el carro completo en Veracruz?

En 1988, fue una coyuntura nacional de la democracia burguesa, generó reacomodos al interior del priismo veracruzano que se configura en salidas significativas a nivel de base y de división en las cúpulas, la más representativa de esta última es la llegada de Fidel Herrera Beltrán (FHB), no querida por el grupo empresarial encabezado por el último de los denominados

cachorros de la revolución, Miguel Alemán Valdez, oligarca local de pañales de seda perteneciente al grupo de empresarios y políticos de oficio neoliberales posicionados en la junta administrativa en turno de ese tiempo.

El sexenio del “tío Fide” inicia con el distanciamiento con la élite empresarial neoliberal local para posicionar a familiares y grupos económicos afines, pero lo que marca a la administración es el regreso del priismo de viejo cuño (demagogia, derroches, escándalos e injusticias sociales).

Capítulo siguiente, la designación a modo de Javier Duarte de Ochoa, para que funcionara de tapadera de Herrera Beltrán. Que para sacudirse de ser sombra de su padrino y mentor se adhiere de manera incondicional al proyecto de Enrique Peña Nieto, y es así que forma parte de la caja chica de su partido a nivel federal, pero no fue la corrupción el distintivo de su gobierno sino el cometido sistemático de crímenes de lesa humanidad, al grado de ser considerada dicha entidad como la fosa clandestina más grande del continente.

Hastío social; permanente crítica política al imberbe gobernante con ínfulas de nobleza; continuas protestas de familiares de víctimas de ejecutados extrajudicialmente y detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales; la revelación inédita de la lucha de los trabajadores de la educación en Veracruz contra la reforma educativa, son los fenómenos sociopolíticos que se integran a la coyuntura para desarticular el mecanismo de carro completo en la entidad, aunado al factor AMLO y llegada de Cuitláhuac, para éste sólo “suerte de principiante”.

Los atropellados por el carro completo

Es el primer descalabro electoral para Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se confirmó el esperado retroceso para el Partido de Acción Nacional (PAN), organismos electorales que no sólo fueron embestidos por el bus tricolor, sino descarrilados de “puestos de elección” con una importancia local en los



aspectos económico y político.

La envergadura de las presidencias municipales en la lucha electoral radica por el manejo indiscriminado del recurso económico y la infinidad de negocios “lícitos e ilícitos” que realizan desde el recinto municipal; la utilización del fuero para la captura y cautiverio de votos. Por su parte las diputaciones son el instrumento político para agilizar o bloquear iniciativas, programas, proyectos de toda índole desde el poder legislativo, impulsar o malograr campañas y/o candidatos. En suma, la ocupación primordial de ambos puestos públicos es con planes a la elección federal.

Los dos grandes perdedores de la pasada elección son Morena y el PAN. La división, enfrentamiento interno y un desenfrenado pragmatismo por las cúpulas de estos partidos son las causas sustanciales, a la vez es el anuncio de una presagiada debacle organizativa-política de estos organismos.

Con lo que respecta a los partidos minoritarios se mantienen como satélites adheridos a la órbita de la partidocracia, su existencia y funcionalidad radica que en algunas de las veces son apéndice, en otras cuñas, por lo general siempre se van con el mejor postor, sobre todo, son rémoras de los cientos de millones de pesos con que se alimenta a la democracia burguesa.

Perversidad y farsa de la democracia burguesa

De manera perversa la democracia burguesa intenta imponer que la “representación popular”, “participación ciudadana” y “legitimidad” en los procesos electorales se garantiza con la existencia de varios partidos políticos en cada contienda, aunque su participación sea insustancial y efímera, y que, de antemano se sabe que la disputa será entre PRI, PAN, PRD y ahora Morena o si algún organismo pequeño electoral triunfa es con la tutela de algunos de los cuatro “grandes”.

Por ejemplo, en Hidalgo, nueve partidos con registro nacional y 2 locales; y en Coahuila 5 partidos nacionales y 3 locales, sin embargo, la

afluencia en las urnas develó tal farsa, todo se reduce a una elitista comparsa circense promovida por las cúpulas partidarias por el interés de obtener un jugoso ingreso económico por “gastos de campaña” y por añadidura algún coto de poder, en eso concluye el grandilocuente acto democrático.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es una institución desprestigiada por su composición facciosa y elitista; integrada por ambiciosos comodines del régimen cuyo único y principal objetivo es alargar lo más que se pueda permanecer en estos cargos públicos por los exorbitantes ingresos económicos que se autodesignan y los privilegios de príncipes, para eso sirve la autonomía de este aparato de control y mediatización política.

Pero el desgaste y pérdida de credibilidad no es sólo del INE, otros instrumentos como las encuestas previas, durante y posterior a la elección, lo único que buscan es llamar la atención hacia los procesos electorales e incidir en la población para acarrear “voluntades” a emitir el voto sea como sea. El ejercicio “democrático” de elaborar y ejecutar un cuestionario conducido pasó de ser una herramienta exclusivamente gubernamental de muestreo para el análisis e inducción perversa al voto, a un gran negocio particular, para los mercaderes de la farsa electoral.

Un elemento indispensable es el exagerado gasto económico en publicidad, recursos humanos y carnales campañas para convencer de las cualidades superlativas y samaritanas de un político de oficio que fabrica de la nada superflua trayectoria y probado compromiso con el pueblo.

Cierra el círculo de la farsa el enunciado mecánico de fraude, para aparentar competitividad, como parte de las características propias de la contienda electoral que la definen como un proceso tramposo y corrupto. Son un conjunto de medidas políticas que se instrumentan para dar confianza y legitimidad al desprestigiado sistema electoral.



El significado electoral de Coahuila e Hidalgo

Dos entidades que en apariencia no representan un peso significativo en la disputa por el dominio de los puestos de elección en la geografía electoral nacional, son parte de la suma en la obtención de posiciones de representación burguesa que se materializa en el desplazamiento y preponderancia de los grupos de políticos de oficio y oligarca, por ello, es una disputa política ajena para el pueblo.

A la vista pareciera insignificante el resultado de los comicios de noviembre ante los próximos en este 2021, nombradas como las elecciones más grandes de la historia, sin embargo, no deja de ser en esencia sólo un posicionamiento y reacomodo de los grupos oligárquicos.

El resultado de esta elección se convierte en caja chica y plataforma política para beneficio de los “triunfadores”, desde ahí disputar futuros cotos de poder y el mantener o crear fuentes de ingresos económicos constantes y sonantes, objetivos reales de la disputa electoral interburguesa.

Es la señal de que los procesos electorales nunca han abandonado los rediles naturales de la democracia burguesa en México, el contundente abstencionismo y el carro completo del PRI, convierten a la locomotora de la 4T en furgón de este híbrido carro tricolor que, en su marcha al PRD lo reduce a durmiente y descarrila al PAN.

El porvenir de Morena

Los votos que obtuvo Morena, incluso en coalición, en Hidalgo y Coahuila, son un reflejo fiel de cuál es la situación actual de este partido electoral; dependencia del mesías, el desgaste prematuro que éste y regeneración nacional enfrentan; y la dinámica de disputas intestinas de intereses personales y de grupos, entre viejos políticos de oficio pertenecientes a tribus y castas que datan desde la cofradía política ideológica del llamado Frente Democrático Nacional (FDN), y los recién reciclados priistas y panistas.

Heterogénea mezcla que viene desde el origen del FDN a su reedición actual Morena, que

revuelve ideologías en apariencia diferentes en el espectro electoral por medio de un pragmatismo exacerbado, uso y costumbre de las formas burguesas de hacer política que develan un oportunismo sin escrúpulos que no disimula las formas. Donde entes “dispare” se confrontan por mezquinos intereses, sin embargo, son homogéneos por el supremo interés de clase, preservar al capitalismo.

Establezcamos diferencias, entre la nota de la prensa y el comentario desde la academia, y el que emana de la vivencia de los militantes de Morena que se encuentran por convicción o por fe en el caudillo; los primeros en su mayoría son orgánicos del régimen o mercenarios de su oficio; los segundos, por su situación política fincan equivocadamente su esperanza de salir de la explotación, pobreza, miseria y opresión política por medio de la lucha electoral personificada en políticos de oficio burgueses, una es de esencia venal, la otra de atraso político y nula conciencia de clase.

De igual manera colocar en su justa dimensión la propaganda de la junta administrativa, lo que se llama el partido en el poder, el cual no acepta que se califique el proceso electoral tal cual es: antipopular, corrupto y tramposo, de la misma manera niega la realidad inocultable de Morena de fragmentación y enfrentamiento interno; que ya no logró ser el partido electoral que vislumbraron especialistas, menos aun el proyecto oligárquico anhelado, ser el nuevo partido electoral de la hegemonía nacional que consiste en tener la presidencia de la República, mayoría absoluta en el Legislativo (federal y local) y la mayoría de las gubernaturas y alcaldías en el país.

Al transcurrir la gestión de la junta administrativa federal la militancia que tuvo fe en el proyecto morenista presencia cómo se desvanece la esperanza que puso en éste, que lo prometido en campaña pasa como otro catálogo más al archivo muerto de las promesas electorales para ser utilizadas en otro tiempo, “descubren” que el partido en que confiaron —Morena— es



igual a los que las cúpulas de éste señalan como sus adversarios.

Es un engendro...

Es una criatura natural gestada por la democracia burguesa, la alianza pactada por PRI, PAN y PRD (PRIAN-RD) concebida por la mezquindad de las pugnas intestinas, un acto más de cínico pragmatismo político del régimen, parido sin dolor por las formas de organización y lucha de la clase en el poder.

Muestra el reacomodo y agrupamiento de cúpulas de estos partidos electorales con la única finalidad de aumentar para sus clanes familiares-políticos cotos de poder, aumentar ingresos económicos a sus arcas particulares, a costa de utilizar al pueblo como mercancía electoral y un sangrado permanente del erario público.

No es un fenómeno nuevo, por el contrario, es el pragmatismo recurrente en cada elección como también quienes la integran estas "oportunas" alianzas, son siempre los políticos de oficio desplazados, sustituidos y canceladas sus aspiraciones personales o de grupo por sus pares mejor posicionados, por lo que PRIAN-RD es una alianza revanchista, elitista y mezquina, como todos los entes políticos que protagonizan y viven de la democracia burguesa.

Los oligarcas confrontados con la actual junta administrativa, entre ellos Claudio X González, son los que están capitalizando la disputa política-electoral entre cúpulas partidistas,

al acuerparlos en México Sí, un proyecto eminentemente oligarca.

Todo lo anterior aunado a un sistema electoral desprestigiado por antipopular, faccioso y corrupto proyecta que el abstencionismo no bajará del 50 por ciento y es plausible la tendencia creciente a rebasar el 60 por ciento en la próxima elección.

Democracia burguesa versus revolución proletaria

Las elecciones sólo sirven para legitimar la explotación y opresión política. El sistema electoral en pleno es el principal aparato de mediatización y control político del Estado, al imponer la emisión forzada del voto por medio de coacción económica, política, jurídica, policíaco-militar y el bombardeo ideológico a las masas asalariadas, es la imposición violenta de la voluntad oligárquica a la mayoría del pueblo.

La toma del poder por el pueblo jamás ha sido ni será por medio de los procesos electorales; por la vía electoral únicamente se accede a la administración pública, situándose los "triunfadores" como una junta administrativa de los intereses burgueses. Las revoluciones proletarias han tomado el poder por la acción armada revolucionaria, el pueblo en armas que toma por asalto la fortaleza del capital.

La duda política entre reforma o revolución hoy queda despejada con claridad, la primera sólo es un parche mal pegado que oxigena al régimen capitalista; la segunda se vislumbra con nitidez como una necesidad histórica ineludible.



pdpr-epr



Revolución a Debate

El Estado burgués y su papel



El Estado responde a los intereses de una u otra clase, pero resulta imposible por su origen y el papel que ocupa en el desarrollo de la sociedad dividida en clases sociales, la conciliación o fundición de ambos intereses, es una quimera pensar en ello y se engaña al pueblo para aplazar la liberación de sus cadenas de opresión y explotación.

El Estado es en sí el instrumento de sometimiento de una clase sobre otra, por ende, el Estado mexicano tiende inevitablemente a garantizar los intereses de la clase en el poder independientemente de la política del gobierno en turno.

En esencia, el Estado mexicano es de carácter burgués, no hay rendijas que al conjunto de los explotados y oprimidos del país permita su coexistencia con el verdugo, la naturaleza de este último es voraz y las instituciones que la sostienen forman el cúmulo de fuerzas para mantener a su contrario en la condición de sujeto sometido.

La actual junta administrativa no deja en ningún momento de instrumentar políticas en función de las exigencias y necesidades del poder burgués. Si no fuese este el caso, por un lado, los crímenes contra las masas trabajadoras cesarían, la impunidad sobre los perpetradores

materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo serían coronadas con la justicia.

Los incentivos a la Guardia Nacional, al Ejército mexicano, a los integrantes de la SEMAR y demás corporaciones policíacas desplegadas a lo largo de la geografía mexicana, particularmente en la región Sur Sureste, son política de gobierno y constituye una respuesta a la exigencia del capital para garantizar la imposición de sus intereses. Es una necesidad inaplazable del imperialismo, por ende, de la oligarquía mexicana afianzar el Estado policíaco militar.

Las instituciones castrenses son el pilar para imponer la voluntad burguesa, en éstas descansa la política del actual gobierno sin miramientos a sostener los planes neoliberales de sus antecesores que les recrimina como responsables de la miseria del pueblo mexicano.

La política del gobierno actual se presenta populista y más de uno puede cautivar algunas medidas de forma, pero la esencia en estructura se mantiene inamovible, prestos a alargar la agonía del trabajador del campo y la ciudad. Las cadenas de esclavitud asalariada se aceleran y materializan en sutiles políticas asistencialistas y de contrainsurgencia.



El afianzamiento del Estado policiaco militar y estado de derecho oligárquico es distintivo de un gobierno burgués y antipopular, los hechos represivos en aquellas entidades que se fincan intereses políticos empresariales y la ejecución de crímenes de lesa humanidad cortan de tajo el discurso benevolente de la 4T y confirma su carácter de clase, las víctimas siguen siendo del pueblo.

No puede existir coexistencia entre clases sociales antagónicas, no es la “buena voluntad” de un individuo lo que se impone sobre los intereses de quienes detentan el poder, sino las leyes del capital que toman cuerpo en la clase burguesa y oligarquía para garantizar su condición privilegiada a costa de la pobreza, miseria, expoliación y sometimiento de las masas trabajadoras.

A tal efecto, el pueblo que lacera su existencia en las fábricas, en las minas, en los campos agrícolas, en el comercio informal a lo largo de las calles de barrios populares se debaten en interminables dificultades para atender su salud, educación, vivienda, vestimenta, etc., situación que se acrecienta por la crisis económica.

El aumento al salario mínimo en medio de la crisis económica no es una medida política significativa para mejorar las condiciones de vida del asalariado, se reduce a paliativos que buscan contener y mediatizar el descontento popular y no sinónimo de un Estado humano que busque erradicar la opresión hacia el proletariado.

No hay comparación con la ínfima cantidad de familias que viven de la fuerza de trabajo del asalariado, el 80% de la población en condición de pobreza o miseria no se compara con el 0.2% representada por la burguesía en el país, es decir, contadas familias son las que concentran la riqueza producida por las masas asalariadas.

Las contracciones engendradas por el capital se agudizan cada vez más e inevitablemente desembocan en descontento popular, suponer que una política de “amor al prójimo” y de conciliación bastan para despojar a la burguesía de su condición de clase opresora y explotadora es pretender conducir al pueblo al abismo para su propia condena.

La conciliabilidad sentenciada como imposible por quienes sostenemos la vigencia de la lucha de clases y el marxismo es una realidad inobjetable en México y podemos asegurar, en todo el hemisferio donde prevalecen las contradicciones de clase. No hay forma de “repensar al Estado”, el *Estado no puede tener otros contenidos ni una orientación distinta* a su origen, su papel y destino no cambia en tanto instrumento de opresión de una clase sobre otra.

No está de más decir que no existe registro histórico en la lucha de los pueblos del mundo donde los intereses contrarios se fundan para dar paso a la satisfacción de necesidades comunes, no sólo porque en la práctica es imposible, teóricamente es contrario al espíritu libertador de los oprimidos que buscan emanciparse del yugo opresor. Si alguien pretende realizar cambios sin plantear la dictadura del proletariado, simplemente no comprende la historia, la burguesía nunca permitirá que se le desplace en lo mínimo de su condición privilegiada.

La historia reciente en Bolivia puede ilustrarnos a grosso modo por qué es necesario plantear la emancipación del oprimido bajo la dictadura del proletariado, si el pueblo no se organiza en función de la necesidad de hacer la revolución socialista no puede conseguir la victoria, el enemigo de clase se reagrupa como reacción para eliminar los intentos por mejorar las condiciones del pueblo incluso con aquellos que buscaron conciliar los intereses de clase.



Los cambios por los que debe luchar el pueblo son estructurales y no de forma, es decir, erradicar la explotación del hombre por el hombre, el carácter privado de la propiedad y de la apropiación de la riqueza en pocas manos para que tome su carácter social. Todo intento de los gobiernos en maquillar el papel del Estado burgués es política burguesa, es la reacción que pretende arrastrar al pueblo despolitizado a solapar la violencia engendrada por él.

El Estado burgués tiene un destino marcado por las contradicciones engendradas producto de la propiedad privada de los medios de producción, esto es, el Estado proletario que tiende a desaparecer conforme acaba con la reacción burguesa en sus intentos por sobrevivir y volver a sentar cabeza. El pueblo trabajador nada debe temer, en sus manos está su propio destino, hacer frente a la violencia burguesa con la violencia revolucionaria.

El pueblo trabajador debe abrazar las banderas de la revolución socialista para imponer su voluntad, no dar margen a la burguesía a conducir mediáticamente la voluntad popular de combatir bajo los marcos corporativos o la democracia burguesa. La lucha de clases en nuestro país da el marco de referencia histórica para que las masas proletarias, debidamente organizadas y estructuradas consigan su triunfo sobre su enemigo de clase bajo la dictadura del proletariado.

En el proceso, los explotados perdemos las cadenas que nos atan a la explotación capitalista, no hay gesta revolucionaria si no se construye la organización de los oprimidos y explotados, el pueblo debe dar el salto de calidad y abrazar la lucha por su emancipación.

vdpr-epr



“El afianzamiento del Estado policíaco militar y estado de derecho oligárquico es distintivo de un gobierno burgués y antipopular...”



**PENSAMIENTO DEL
MILITANTE
COMUNISTA**



**El trabajo bajo
una concepción
proletaria**

El militante del PDPR-EPR debe de tener una actitud correcta ante el trabajo, debe tener iniciativa ante todo lo que realice y disciplina al trabajo físico e intelectual; en nuestra preparación política y militar el trabajo es escuela de una actitud nueva, de una nueva moral, la principal necesidad del hombre para satisfacer sus necesidades y además como fuente creadora del hombre, con ello ve reflejada su formación y reeducación.

El profesional de la revolución siempre debe tener una actitud correcta ante el trabajo, de él depende que comprenda que el pueblo luche por su liberación, así como la necesidad de luchar por la revolución socialista por vía de las armas, que ante todo lo que haga siempre está reflejado en el trabajo constructivo, porque todo lo que realiza es trabajo que construye y guía por el camino de la liberación del hombre.

El trabajo hizo que el mono se transformara en humano, dominar a la naturaleza y transformarla, por lo tanto, no sólo es un medio para satisfacer sus necesidades materiales, es una necesidad vital del hombre, éste es producto del trabajo y se debe a él, el revolucionario nunca debe de perder de vista lo importante que es el trabajo para su formación y construcción.

En el capitalismo el trabajo, se convierte en la explotación de la clase explotada, respectivamente al trabajo asalariado, pero no se puede negar el desarrollo de las fuerzas productivas, el que pondere los métodos artesanales de producción, no tiene una actitud correcta ante el trabajo. El trabajo

enajenado hace que el hombre se sienta extraño a su producto, pero cuando comprende que la actividad productiva es una actividad liberadora, la conciencia del hombre se desenvuelve en una nueva actitud hacia el mismo hombre.

El revolucionario debe realizar el trabajo consciente, con él rompemos con la rutina que nos degrada como ser humano, por muy enajenante que sea la jornada laboral, se debe comprender como un acto de libertad, una actividad donde el cuerpo y mente sanan, no se trata de promover una actitud pasiva ante la explotación sino comprender que la clase capitalista genera las condiciones para construir el hombre nuevo, el revolucionario asume la tarea de organizar a toda la clase trabajadora para que luche y se libere de las ataduras del capitalismo, que luche contra la explotación y presión a través de la revolución socialista.

El militante debe comprender que el trabajo es importante para el hombre, ante todo lo que realice debe de tener una actitud correcta en el trabajo físico e intelectual, no debe de haber una distinción en el uno y otro, el que no trabaja se enferma, se deshumaniza y se extravía en la vida y en la historia; si pretendemos transformar al pueblo lo debemos demostrar con la actitud correcta ante el trabajo, la vida, el hombre y la sociedad, el que no le pone empeño al trabajo, se queda estancado y no avanza en la construcción del hombre nuevo.

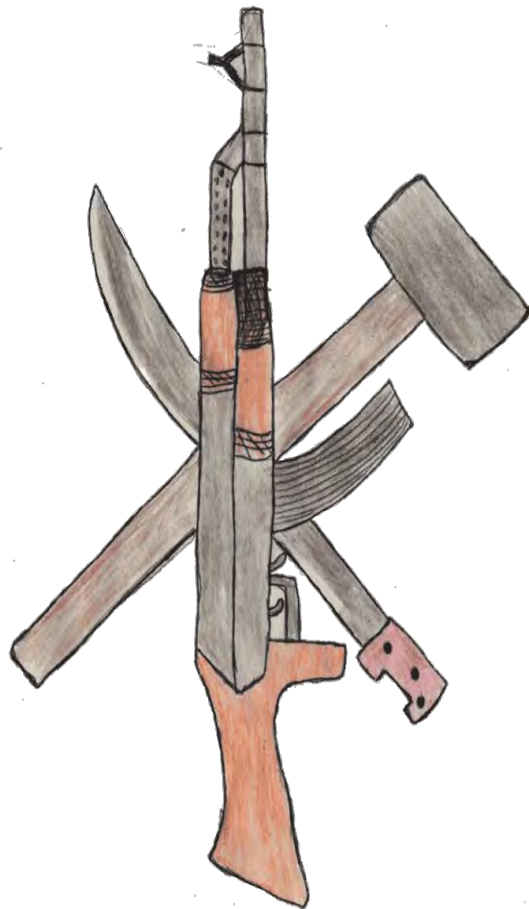


La disciplina es importante, el trabajador asalariado adquiere disciplina por la fuerza del trabajo, a pesar de que todos los días tiene que asistir a él de manera forzada, por diferentes razones de su condición de vida, pero eso no es razón para negar la actividad que nos hace humanos.

Ante el trabajo físico e intelectual no debe de existir una separación del uno del otro, ambos expresan las mismas condiciones de esfuerzo creativo, en el trabajo manual es el modo más intenso donde se subraya la personalidad de la moral comunista; la mayor parte de la humanidad se encuentra en esta actividad productiva, mientras no se libere de la explotación capitalista, seguirá existiendo la división mecánica entre la labor práctica y teórica, pero estas dos actividades del ser humano, deben de comprenderse que son fases de la producción en la que los hombres resuelven sus necesidades vitales y no pueden existir por separado.

El individualismo es consecuencia del trabajo enajenado, por lo tanto, enajena la esencia del hombre, la vida social de la especie la reduce a la vida individual; el trabajo alcanza un significado moral cuando se trabaja con el pensamiento de satisfacer sus necesidades personales y a la vez para la humanidad, como clase explotada debemos adquirir conciencia de que somos explotados y oprimidos, que el trabajo enajenado y el salario que nos dan a cambio de nuestra fuerza de trabajo, no nos saca de la pobreza y miseria que padecemos, entre nosotros nos debemos asumir como hermanos de clase, debe existir la solidaridad y reciprocidad, ayudarnos ambos y juntos enfrentar al enemigo de clase.

La actitud correcta ante el trabajo conduce al hombre a la aspiración de dominar el mayor conocimiento posible de la ciencia y la tecnología, el revolucionario debe apoyarse en ambas, con la



ciencia comprende el por qué de las cosas, lo que significa un profundo amor al avance de la humanidad en el dominio de las fuerzas vivas de la naturaleza, el trabajo productivo hace que el hombre se sienta humano y liberado de todo atraso cultural.

La exigencia es transformar al régimen capitalista, para que el trabajo se convierta en un verdadero acto dignificante del ser humano; la tarea que surge es organizar a todo el pueblo descontento, que comprenda y adquiera conciencia de clase, para que luche y se libere de las cadenas de la explotación y opresión, que se comprenda que la única vía de destruir de raíz al capitalismo es con la revolución socialista.

vápr-epr





CARTAS DE LA MILITANCIA

LA PREPARACIÓN DEL MILITANTE

Un saludo combativo y revolucionario a todos los camaradas de mi partido

Compas:

A mí me motiva saber que pertenezco a las filas del PDPR-EPR y que en todo el proceso de aprendizaje, nos conduce a la reflexión como militantes; nos ayuda a comprender la necesidad de la lucha, el por qué se organiza el sujeto revolucionario; conscientes que para eso debemos tener el tiempo y disposición para cubrir cualquier llamado que se nos haga, siempre debemos tener una actitud combativa para librar batalla contra el Estado burgués desde el lugar que nos encontramos, por eso nuestra cotidianidad debe regirse por la preparación político-militar.

A los camaradas que pasen por este camino, cada uno debe dar su mayor esfuerzo en aprender porque aquí se demuestra qué tan dispuestos estamos a realizar las tareas encomendadas por el partido; a través del estudio comprendemos la necesidad de prepararnos para que el día de mañana nosotros enseñemos a otros, para sumarnos al trabajo en el proceso de construcción revolucionaria, porque la alternativa para el pueblo es la revolución socialista.

Es necesario transformar el sistema capitalista porque comprendemos las condiciones que vivimos como clase proletaria, entonces debemos politizar a otros para que se sumen a la causa revolucionaria para nuestra emancipación.

Como militantes debemos asumir conscientemente la necesidad de llevar una preparación física porque implica estar en buena condición para combatir en cualquier momento de represión o contra el enemigo, entonces queda seguir con nuestra preparación para enfrentar al enemigo, recordemos que el sujeto consciente debe mostrar gallardía en cada combate proletario.

Por eso no debemos desaprovechar cada llamado que nos haga el partido, éste es un momento para aprender, es aquí donde el militante decide estar y demuestra qué tan convencidos estamos en el proyecto de la lucha para desempeñar las tareas, porque el militante cuando está convencido puede superar cualquier dificultad, en el trayecto de su vida cotidiana y como revolucionario.



Ser fiel al partido, construir cuadros políticos e impulsar la colectividad revolucionaria, ésta siempre debe tener una vida orgánica dirigida y estructurada, son algunos principios que debe desarrollar el militante comunista.

Todo militante debe tener claridad de las tareas de la revolución, cada uno ocupa un lugar y desempeña un papel dentro del partido, debe tener madurez política para que todo marche bien en nuestra formación, de esa manera no caer en la debilidad política e ideológica y no facilitemos el trabajo al enemigo, porque esta lucha es un proceso de largo aliento.

La relación entre camaradas en colectividad es de buena convivencia, en ella se comparte experiencia, por eso es necesario acatarse de manera consciente a los principios, porque a través de éstos se reeduca el militante para que toda colectividad avance, entonces sólo así nuestro aprendizaje es integral.

Todo trabajo que amerita grandes esfuerzos se soluciona entre todos, se tiene disposición para resolverlo, es más fácil ponerse de acuerdo y distribuirnos el trabajo porque aquel que no tiene esa mentalidad y disposición le busca muchos pretextos para eludir la responsabilidad, de ser así, es porque no está convencido de estar aquí, quiere estar sumergido en los vicios, en la alienación del sistema capitalista.

Los vicios del sistema sólo llevan a la descomposición, como el agua que corre, pero llega el momento en que se estanca y no tiene donde filtrarse, se descompone y llega a la pudrición, eso pasa cuando no hay claridad política e ideológica.

Como integrante de la clase explotada y oprimida es necesario prepararnos para impulsar la lucha, porque es el camino adecuado que nos llevará a lograr nuestro objetivo trazado, queremos transformar de raíz la sociedad capitalista. Debemos asumir las tareas desde el lugar que nos

toque en función de avanzar en la lucha revolucionaria, se requiere tener claridad porque necesitamos dar saltos cualitativos para tener una actitud combativa y correcta ante la vida.



Camarada Montana



BIDEN Y LAS CONTRADICCIONES IMPERIALISTAS EN EL SIGLO XXI

El ascenso del “nuevo” jefe del ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, revela con nitidez lo agudo de las contradicciones que se dan al interior del imperialismo estadounidense; y, en general es reflejo inherente de las contradicciones que se desarrollan en el seno del imperialismo internacional.

La agudización de la crisis económica en el último año, ha hecho evidente la crisis política que enfrenta el régimen capitalista mundial en su conjunto, a grado tal que ha alcanzado al corazón imperialista donde se ha expresado en su forma de “disputa electoral”; la democracia burguesa en sus diferentes formas es cuestionada por las masas populares, incluso en los países imperialistas, y la política del imperialismo se decanta hacia el fascismo de forma acelerada.

Esto es signo distintivo de lo inviable del capitalismo para la humanidad y la tendencia natural que éste adquiere en su fase superior hacia sus formas más reaccionarias como recurso de la oligarquía internacional que tratan por todos los medios salvaguardar sus capitales. Este es el trasfondo de la disputa Trump-Biden que se esconde tras la mascarada democrática electoral.

Esta situación que se agudiza es lo que marca el curso del presente siglo, así como lo que determina actualmente la política interna y externa del imperialismo estadounidense, día a día se expresa y desarrolla en las relaciones económicas y políticas de éste con los demás países alineados y no alineados, espacio donde toman cada vez mayor relevancia las relaciones

con Rusia, China, Irán y toda su zona de influencia.

Países con los que el imperialismo yanqui disputa y ve amenazada su hegemonía y que hasta el momento no han llegado a la confrontación militar directa, no porque éste asuma una responsabilidad con la paz mundial, sino porque sus posibilidades de triunfo militar a largo plazo no le favorecen; pero sí, la opción y salida a sus contradicciones internas y crisis económica cuando las posibilidades se lo permitan.

No hay un solo país que se encuentre exento de esta situación internacional que ha mantenido en vilo a los pueblos del mundo por el riesgo latente de la guerra mundial, no existe continente ni región del mundo que se encuentre fuera de los planes imperialistas, del intervencionismo e injerencia político militar que encabeza Estados Unidos desde el fin de la segunda Guerra Mundial.

Lo que sí es una constante, son los horrores que causan las guerras de rapiña en la región de Medio Oriente y vastas regiones geográficas devastadas por la división y el caos, sumidas en la miseria y la violencia; la permanente agresión sobre los pueblos del mundo que tienen como objetivo el despojo económico y la sumisión política. Esta es la esencia de la doctrina política que da vida a “los principios sagrados del imperialismo estadounidense” que Biden ha prometido restaurar.

Muy a pesar de las congratulaciones de aquellos que ven en Biden el regreso de la “democracia”, así como de la política del



supuesto respeto a los derechos humanos y una política ambientalista, temas a los que se refirió en su toma de protesta como un credo de fe que existe en la palabra y letra pero que se viola y omite descaradamente en los hechos.

El proceso electoral estadounidense que culminó con la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos de América (EUA) y la condena internacional político moral de Donald Trump, sobre todo de los países miembros de la OTAN, así como la censura descarada en los monopolios de la comunicación, exhibió ante la mirada internacional el sistema político en su conjunto de Estados Unidos como fiel representante del imperialismo internacional, y con ello, la esencia de la democracia burguesa en pleno siglo XXI.

Con la exacerbación de las contradicciones internas en la última etapa del proceso electoral estadounidense, ha quedado evidenciado lo que siempre ha sido una gran mentira, farsa y simulación frente al mundo, su sistema electoral “democrático” y su careta como defensor de la democracia mundial. El gran “defensor” de la democracia en el mundo, se ha exhibido como un país en el que la voluntad del pueblo estadounidense no importa lo más mínimo, ni se respeta, y que lo que realmente importa en su sistema político electoral es mantener el régimen a salvo.

El argumento bajo el que se han justificado unilateralmente invasiones, intervenciones militares, guerras, golpes de Estado, asesinatos políticos, bloqueos económicos y todo tipo de actos y maniobras criminales por todo el orbe, hoy podría aplicarse de la misma manera a este país imperialista por parte de cualquier otro país que asumiera esa posición, ser garante de la democracia, y así justificar la intervención político-militar en suelo estadounidense.

Esto y más es lo que EUA ha hecho al aludir autoritarismo, represión a opositores políticos, fraude electoral y amenaza a la seguridad y paz mundial, verbigracia, Cuba desde hace 60 años, Venezuela en los últimos 20 años, todo Medio Oriente en lo que va de este siglo, Ucrania y Bielorrusia recientemente, sólo por mencionar algunos.

A raíz de las protestas y disturbios que generó su proceso electoral, la elección presidencial norteamericana se puede juzgar con facilidad como fraudulenta. Es práctica común que su sistema electoral permite como regla “democrática”, que ejecuta a través del Colegio Electoral, camarilla pro oligarca, que determina los resultados según los intereses oligárquicos, designar al presidente sin importar los resultados de los votos.

Esto es lo que refleja el grado de sus contradicciones internas y el proceso de descomposición que sufre el imperialismo en sus propias entrañas, algo que había logrado evitar, durante el siglo pasado, con la tesis del “enemigo común” y que difundía de manera permanente con la propaganda anticomunista. La “amenaza comunista” fue durante el siglo XX lo que por fuerza de razón de Estado amalgamó a la oligarquía para proteger sus intereses.

Bajo esta tesis el imperialismo internacional desarrolló una política abiertamente anticomunista y logró posponer sus contradicciones internas al distraer la atención de su población e imponer una política de Estado que garantizara la continuidad del régimen y el poder del grupo oligarca dominante; doctrina política que se logró mantener de forma permanente hasta la disgregación de la URSS en 1991.



La política imperialista vuelve a sus viejos cauces de la doctrina clásica

Lo que analistas de gabinete, monopolios de la comunicación, se desviven en llamar “vuelta a la normalidad y triunfo de la democracia”, exhalando un tufo de tranquilidad y dando a entender que se termina el “horror” que representó Trump y regresa la democracia al país vecino con la ascensión de Biden, sin embargo, es la vieja política del intervencionismo, anexión y guerras de rapiña, bajo la que el imperialismo norteamericano ha sometido a países en el mundo, sumiéndolos en la división y destrucción, así como a la dependencia económica que no es más que el nuevo colonialismo imperialista.

Sólo basta observar los hechos que han derivado de su mandato una vez instalado en la Casa Blanca, que anunció en su discurso de toma de protesta, para darse cuenta de cuál será la línea estratégica de la política imperialista en los próximos cuatro años. Más que inocentes suspiros de alivio por haberse terminado la “era Trump”, lo que a los pueblos del mundo debe ocupar es la preparación e intensificación de esfuerzos para enfrentar una nueva embestida imperialista, más violenta que la que desarrollaba y que orilla a la conflagración bélica mundial.

Si la forma burguesa de hacer política de Trump, se basaba en la intimidación, la bravuconería, el desparpajo y su falta de recato para exponer públicamente la política imperialista, ante los ojos de la diplomacia internacional políticamente incorrecto, la de Biden es justamente lo contrario: de discurso afable y políticamente correcto ante los ojos del mundo, con rostro “humanitario y de sensibilidad” ante los “retos mundiales”, pero de ejecución criminal en los hechos de la política

imperialista. Forjado en la vieja escuela del imperialismo estadounidense, un clásico representante de los intereses oligárquicos, tiene un largo historial como hombre del régimen que lo acredita como fiel ejecutor de los métodos más violentos para imponer la hegemonía estadounidense.

Ha sido activo participe en la política del imperialismo durante los últimos treinta años, como senador, de 1973 al 2009, impulsó y apoyó la guerra contra Yugoslavia que llevó a su desintegración y la intervención militar en Kosovo, así como la táctica de bombardeo que se utilizó contra estos pueblos por parte de la OTAN; de igual forma ha tomado parte y responsabilidad política en la invasión y guerras de rapiña que han destruido Afganistán, Irak, Libia y Siria, donde se ha utilizado la misma táctica de bombardeo pero a mayor escala y de forma masiva.

Donde el objetivo principal de esta táctica es el de generar el mayor daño posible a la población para generar terror y una situación de caos, cosa que el entonces senador Biden promovió abiertamente el asesinato de Saddam Hussein en Irak, hecho criminal que se consumó.

Resulta que el “nuevo” presidente de EUA, el que va a “restaurar el alma de Estados Unidos”, el que conmovido ante las cámaras lanzó condenas político morales contra su antecesor por los decretos aprobados en materia migratoria y ordenó su inmediata anulación; el mismo que injurió de “terrorismo doméstico” a las protestas contra los resultados electorales y que en los hechos son opositores políticos; el que habló de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en su mensaje de toma de protesta; es el mismo que firmó, dictó y dio instrucciones en el mandato de Obama para deportar a millones de indocumentados, mientras hipócritamente



asumían en el discurso un rostro humanitario, un agente activo del terrorismo imperialista que ha contribuido al diseño e implementación de la táctica de financiamiento a ejércitos mercenarios, como el ISIS, para utilizarlos en función de sus intereses, en lo cual tiene responsabilidad criminal.

El Joe Biden empático, el de los homenajes públicos por las víctimas de Covid-19 en su país, una vez vestido como presidente, engrasó la maquinaria de la injerencia e intervencionismo en varias regiones del mundo bajo la clásica fórmula de la desestabilización interna de países financiando operaciones abiertas de golpe de Estado y a mercenarios, disfrazados de restablecimiento de la democracia y de opositores políticos. Política imperialista que ha generado más muertes que el Covid-19.

El Biden público del buen trato y compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente, es corresponsable y responsable directo de los crímenes imperialistas que se han cometido contra el pueblo de Yugoslavia, Libia y todo Medio Oriente, con el propósito de apropiarse de los recursos naturales en la región, principalmente hidrocarburos; y recientemente, no titubeó en lanzarse sobre los recursos energéticos de nuestro país, petróleo, gas, litio y agua principalmente, a través de su instrumento comercial TMEC.

Paradójicamente, resulta que el bravucón de Donald Trump terminó su administración sin iniciar una nueva guerra, cosa que no había sucedido, deportó a menos indocumentados que Barack Obama, premio nobel de la paz, y construyó mucho menos kilómetros del muro fronterizo, que tanta consternación hipócrita generó en la dictadura de opinión mundial, de los que construyó Bill Clinton.

El horizonte político para las masas proletarias

En política no existen las casualidades y por ello la presencia de Clinton, Bush y Obama, en la ceremonia de toma de protesta de Biden a manera de padrinos que expresan su respaldo, deja claro desde el primer momento cuál será la política del imperialismo estadounidense para los próximos años. Su administrador, Biden, tiene clara su tarea, así lo expresó sin titubeos en su mensaje y prioridades generales de su agenda oficial de gobierno: 1) El clima; 2) La equidad racial; 3) La economía; 4) La salud; 5) La inmigración; y, 6) Restaurar el status global de Estados Unidos.

En relación con México la política Biden definió en estos temas: migración, comercio, energía y seguridad; y a lo que el Estado mexicano, en persona de Marcelo Ebrard, respondió un tanto complaciente al proponer “en la relación bilateral México-EUA, un Grupo de Alto Nivel en Seguridad”; instrumento que no es nuevo, data de los sexenios panistas y peñistas en los que se consumó la integración militar de México a Estados Unidos con la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en el 2005, por Vicente Fox y se formalizó en el 2007 con la Iniciativa Mérida con Felipe Calderón, integración que se afianzó en el 2009 con el mandato Obama-Biden.

A lo que de inmediato la reacción política en México, representada en FRENA, vio con ojos de servilismo y entreguismo, pidió a Biden la intervención estadounidense para retomar el poder político arguyendo al trillado discurso de “recuperar la democracia” y poner freno “al autoritarismo”. Estos aspectos hablan de los cauces que tomará la lucha de clases en nuestro país en el mediano y largo plazo.



Para los pueblos del mundo y para el proletariado internacional nada de jubiloso hay en la llegada de Biden a la casa blanca, al contrario, significa un paso más a la catástrofe nuclear, a la destrucción de otros países y desestabilización de otras regiones del mundo, un ajuste a la maquinaria imperialista para recuperar el brío interno que hizo posible, desde la perspectiva oligárquica, la disgregación de la URSS y que mantiene sumido al mundo en la crisis económica internacional.

Política que Joe Biden se encargó de afirmar y dejar claro al mundo en su primer mensaje a la Unión Americana en el que sin tapujos pronunció: *“Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos se requiere algo más que palabras”*. Discurso en el que también llamó denodadamente a la unidad para superar las contradicciones internas *“mi alma entera está puesta en esto: poder unir a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación”*, al mismo tiempo que alertaba del peligro que enfrenta la nación imperialista: *“debemos terminar esta guerra incivil”*.

Lo que implica la constante agresión de los pueblos del mundo y países no alineados, como Rusia, China e Irán; la abierta injerencia político militar en aquellas naciones soberanas que luchan por la construcción de una sociedad sin las injusticias y desigualdades que engendran la sociedad capitalista que tienen como ideario y horizonte político el socialismo, tales como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, entre otros que han decidido no someterse a los designios del imperialismo.

Para los pueblos del mundo y el proletariado internacional, se avecinan nuevas jornadas de lucha antiimperialista, más violentas y en condiciones desfavorables por no contar con la

fuerza y desarrollo suficiente para ir a la ofensiva contra su enemigo de clase; pero al mismo tiempo, esta situación y contexto internacional, vulnera al imperialismo en cada uno de los países capitalistas y da a las masas populares la posibilidad de tomar conciencia política.

Y con ello, el punto de partida para enfrentar la violencia oligarca con la violencia revolucionaria, para desarrollar combate proletario bajo las formas y métodos revolucionarios. Toda crisis capitalista lleva aparejada también la posibilidad histórica de la revolución socialista.

En la época actual, todo esto hace de la democracia burguesa y su base material que es la sociedad capitalista un anacronismo de la historia, constituye un lastre para la humanidad; el desarrollo histórico está demandando nuevas formas de relaciones sociales, la superación del actual régimen socioeconómico para dar curso al desarrollo de la humanidad en un régimen superior al actual donde sean superadas las lacras capitalistas.

Esto es a lo que se opone y teme la oligarquía imperialista y sus cancerberos, a esta verdad histórica es a la que tratan de eludir al prolongar el anacronismo capitalista y con ello la ignominia de la explotación y opresión moderna los administradores de los intereses oligárquicos; a esta tarea imperialista ha sido encomendado Joe Biden, quien como sujeto político ha sido engendrado, parido y formado en las entrañas del imperialismo, un fiel representante de la vieja escuela imperialista que, en los últimos setenta años, ha devastado regiones geográficas y pueblos enteros del mundo hundiéndolos en el caos y la destrucción: Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria.

vdpr-epr



VIENTOS LIBERTARIOS

Templanza proletaria

*Pueblo mexicano,
Que en parte duermes con tu enajenada soledad
Bestializado te quieren
Inhumano y degradante
Preso ante el terror burgués*

*Deshazte de su labia envilecida
Despójate de los lastres que te atan
Las fantasías de libertad
Al revuelo de la pudrición
Donde quieren que sacies tu sed*

*Despega de las grietas tu conciencia
Para depurar los pensamientos impuestos
Ideas serviles y ponzoña fratricida
Somos uno, una causa libertaria
Empuñando la justicia
Con justeza proletaria*

*Militante si te hayas confundido
Si la tribulación te agobia
Si las dificultades te sisman
Mantente firme
Comunista consecuente
Revolucionario, ante todo*

*Porque en tu andanza revolucionaria
No estás solo
Diversos son los esfuerzos
Que confluyen en nuestro devenir
Que se agolpan en nuestra conciencia
Firme camarada
Que el partido eres tú.*

*Recuerda camarada
La firmeza del fusil
Nace de la firmeza de la idea
De la idea proletaria
Del temple comunista.*